

L'onde

iliens, Paris-IX* Directeur : Jacques Fouvet

0,70 F

Argentine, 0,70 F; Maroc, 0,70 F; Tunisie, 10 c.; Allemagne, 0,50 DM; Autriche, 8 sch.; Belgique, 7 F; Canada, 40 c. est.; Danemark, 1,50 kr.; Espagne, 10 pes.; Grande-Bretagne, 8 s.; Grèce, 15 dr.; Iran, 30 rls; Italie, 120 L.; Liban, 80 piastres; Luxembourg, 7 fr.; Norvège, 2 kr.; Pays-Bas, 0,70 fl.; Portugal, 8 esc.; Suède, 1,20 kr.; Suisse, 0,70 fr.; U.S.A., 80 cts.; Yougoslavie, 6,28 din.

Tarif des abonnements surp. 25
C.C.P. PARIS N° 4207-23
TELEPARIS N° 63572
 Ad. M&gr.: JOUVENTONNE-PARIS
 Tél. : PRO. (770) 91-29

Au moment où s'achève la visite du premier ministre cubain

L'opposition chilienne semble chercher un affrontement avec le président Allende

De nouveaux incidents, survenant après ceux du mercredi 1^{er} décembre, se sont produits jeudi à Santiago du Chili. La police a dispersé à coups de grenades lacrymogènes une manifestation de femmes — la deuxième en deux jours, — dénonçant le coût de la vie et la pénurie de produits alimentaires. Comme la veille, la manifestation semble avoir été organisée par les partis d'opposition au gouvernement d'Unité populaire.

Des bagarres se sont également produites entre étudiants de droite, protestant contre l'état d'urgence, jeudi matin, et policiers, aux approches du palais présidentiel. D'autres manifestations ont incen-

dé des péchés de volours; allumé des feux sur la chaussée, et même tiré des coups de feu en l'air. Le gouvernement de M. Allende impute ces désordres à une violence concertée, de la part des partis d'opposition, de mettre son avènement en danger.

Au cours des dernières semaines, à l'occasion de plusieurs conflits, le fossé s'est en effet élargi entre l'Unité populaire et les démocrates-chrétiens, appuyés par les conservateurs. Leurs querelles ont été encore aigries par la visite prolongée de M. Fidel Castro, qui doit quitter le Chili samedi matin. Le premier ministre cubain fera une escale au Pérou et en Equateur, avant de regagner La Havane dimanche.

Santiago du Chili. — C'est dans un Santiago orageux, énervé et placé sous contrôle militaire que, devant une foule de soixante mille personnes réunies au stade national, M. Fidel Castro a pris congé le jeudi 2 décembre, du « peuple chilien », après un séjour de plus de trois semaines.

Si la visite du dirigeant cubain a mis en évidence les différends qui subsistent manifestés à la veille de son arrivée, entre l'Unité populaire et la gauche révolutionnaire (MIR) de *Mundo* du 4 novembre, elle a, en revanche, attisé l'hostilité de l'opposition au gouvernement de M. Allende.

Agissant la plupart du temps de concert, le parti national conservateur et le parti démocrate-chrétien (dominé de plus en plus par le courant « dur » des partisans de l'ancien président de la République, M. Eduardo Frei), ont orienté leur offensive sur le front économique politique et institutionnel en attaquant le gouvernement sur ses points faibles : les difficultés relatives de ravitaillement, le conflit qui a éclaté entre partisans et adversaires du gouvernement à l'Université du Chili et l'établissement de la « Papelera », chaîne d'usines fabriquant l'essentiel du papier-journal, dont le principal actionnaire est l'ancien président (conservateur) Jorge Alessandri.

Les journaux de droite ont fait de la « Papelera » le symbole même des garanties accordées à

De notre correspondant
PIERRE KALFON

la liberté d'expression. Pour contrecarrer les spéculations offertes d'achat faites aux actionnaires

par l'Etat, la droite a mis en place une organisation qui incite les citoyens à « ne pas vendre leur liberté » et propose à son tour de racheter les actions.

(Lire la suite page 6, 1^{re} col.)

1971



Konk

Dibujo de Konk

Le Monde, viernes 2 de abril de 1971

CHILE

El Gobierno socialista de Allende se enfrenta a su primera prueba electoral

Santiago de Chile. El domingo 4 de abril, cerca de cuatro millones de chilenos y de chilenas serán llamados a elegir mil seiscientos cincuenta y tres consejeros municipales de entre ocho mil ciento ochenta candidatos. Por primera vez, los jóvenes a partir de los dieciocho años, y los ciegos –gracias a una papeleta en braille– podrán participar en las elecciones. Aún marcado por la propaganda de la campaña presidencial del pasado mes de septiembre, que dio la victoria al candidato de la izquierda, Salvador Allende, el paisaje urbano de Chile se ha visto enriquecido estas últimas semanas con una nueva serie de fotografías, de carteles y de pinturas murales.

El alcance de las elecciones del domingo supera con mucho el marco de una simple consulta a escala local. Prohibidas las coaliciones, cada partido presenta a sus candidatos bajo sus siglas. Hoy más que nunca, los chilenos, tal vez los más politizados de entre todos los sudamericanos, votarán a un partido y no a un hombre. Así pues, para cada formación es la ocasión de contar exactamente sus votos y de medir de cerca su influencia real.

Con excepción tal vez del Partido Nacional (conservador), desmantelado desde la desaparición de su candidato presidencial, Jorge Alessandri, los medios políticos conceden una importancia capital a la consulta del 4 de abril. «Será la hora de la verdad», dicen los demócratacristianos, convertidos en la fuerza esencial de la oposición. «Será un plebiscito –responden los miembros de la coalición de izquierda, actualmente en el poder– las masas emitirán su veredicto sobre los cinco meses de gobierno de Unidad Popular.»

¿Hacia una «Asamblea del Pueblo»?

Para los primeros, se trata de demostrar que la coalición en el poder no es la piedra angular de la política del país, como la propia coalición pretende. Para los segundos, por el contrario, se trata de confirmar que el pueblo apoya la política de su Presidente, elegido en septiembre. Para el Jefe del Estado, el resultado de estas elecciones tendrá un significado mayor aún, pues le permitirá saber si puede plantear un referéndum para imponer una reforma de la Constitución. Una reforma de estas características le permitiría sustituir el Parlamento actual, en el que no tiene la mayoría absoluta, por una «Asamblea del Pueblo» única, que fuese el fiel reflejo del electorado. Esto le ahorraría, cada vez que pretendiese adoptar un proyecto, tener que solicitar, como actualmente lo hace, los votos de un cierto número de parlamentarios demócratacristianos.

Una apuesta tan importante explica el ardor de la campaña electoral. El Partido Nacional ha lanzado hace quince días un nuevo periódico matinal que practica una guerra sin cuartel contra el Gobierno de Unidad Popular «cómplice –afirma– de la expropiación ilegal de numerosas propiedades agrícolas en el sur del país».

La Prensa, órgano de la oposición demócratacristiana, tampoco ha escatimado ataques contra los ministros, explotando lo que se ha dado en llamar «el asunto del cobre». Según las afirmaciones del senador Irureta, Presidente del partido, ciertos contratos de venta en el extranjero del cobre chileno habrían permitido al Gobierno obtener fondos para su campaña electoral.

Por esta cuestión, determinados diputados llegaron a las manos en el Parlamento. El ex Presidente de la República, Eduardo Frei, abandonó el silencio para criticar en términos severos el trabajo del equipo gubernamental que le sucedió: «Debemos, –ha dicho– constituirnos en un sólido bote salvavidas».

Para responder a estas acusaciones, el Presidente Allende y sus ministros han multiplicado, estos últimos días, las declaraciones y han acelerado –siempre dentro de la legalidad– las medidas de socialización previstas, el pasado mes de septiembre, en el «programa de cuarenta puntos» de la Unidad Popular.

Tras haber anunciado la nacionalización –sin conflicto– de las minas de hierro que pertenecían a la compañía norteamericana Bethlehem Steel (*Le Monde* del 30 de marzo), Allende analizó la situación de la reforma agraria. Para presentar su balance, eligió Temuco, en el corazón de la rica región agrícola del sur del

país, zona de colonización alemana, donde el verano que termina ahora ha sido políticamente muy «caliente». Efectivamente, los campesinos han expropiado numerosas posesiones agrícolas a un ritmo que en ocasiones ha superado las previsiones oficiales. Según el Presidente, trescientos cincuenta latifundios, de una superficie total de 1.050.000 hectáreas, han sido expropiados hasta la fecha. «Hemos hecho en algo más de tres meses tanto como el Gobierno Frei en seis años... Expropiaremos este año mil latifundios en Chile.»

Y el martes por la noche, durante dos horas, el «compañero Allende» fustigaba, en Santiago, ante los trabajadores llegados de los suburbios y de las provincias vecinas, a los autores de los planes sediciosos. Afirmaba que ni el Partido Comunista ni ningún otro eran preponderantes en el seno de la coalición gubernamental. Tras anunciar la puesta en marcha del plan quinquenal a partir de 1972, declaraba que «a la violencia reaccionaria, el pueblo respondería con la violencia revolucionaria».

■ *Las elecciones municipales del 4 de abril de 1971 son un éxito para la coalición de la Unidad Popular que, en su conjunto, obtiene prácticamente la mitad de los votos emitidos (49,75%).*

Es la primera vez en la historia de Chile que la izquierda alcanza un resultado así. Con el 22%, el Partido Socialista aparece como la formación ganadora (10% más que en las elecciones de 1969) y el primer partido político de Chile tras el Partido Demócratacristiano (26%).

«Estas elecciones –declara Allende la noche de la consulta– han constituido un desmentido para quienes pensaban que la democracia sería abolida con la llegada al poder de un Gobierno popular».

Alusión apenas velada para aquellos que habían mantenido, en los Estados Unidos en particular, que un Presidente «marxista» en Chile conduciría a la ruina de la democracia. ■

Un «tren de la salud» en tierras Mapuche

Ella se llama Haydée Alarcón. Es dentista en Santiago desde hace treinta años. Pequeña, chispeante, de ojos risueños y cara redonda, fue ella quien lanzó la idea del «Tren de la Salud», cuyo éxito ha sido tan prodigioso que el Gobierno de Unidad Popular va a institucionalizar esta medida.

«Hace años que lo venía pensando—afirma— Con un médico por cada diez mil habitantes, el nuestro es un país sanitariamente subdesarrollado. Cuando Allende llegó al poder, pensé que era el momento de pasar a la acción».

Organizado en unos pocos días, contando únicamente con la colaboración de voluntarios y, salvando la burocracia, con la ayuda del Ejército, de los ferrocarriles y del Ministerio de Sanidad, un tren de doce vagones pintados de blanco ha transportado, durante cinco semanas, veintisiete médicos y dentistas, otras tantas enfermeras y dos jeeps militares con sus conductores, a través de las zonas más alejadas de las tres provincias del sur de Chile, Arauco, Cautín y Malleco, pobladas mayoritariamente por indios Mapuche.

«Nosotros esperábamos cumplir en un 80% nuestro plan de treinta mil actuaciones médicas gratuitas—explica la doctora Alarcón— Viajando de noche y trabajando de día, en ocasiones hasta doce horas seguidas, hemos superado en un 40% nuestro objetivo. Hemos tocado con nuestras propias manos la miseria fisiológica en los pueblos que, en invierno, durante cinco meses, están aislados del resto del mundo por la nieve o el fango. En cada parada del tren, dos equipos partían en jeep por caminos increíbles —a veces tenían que ser remolcados por bueyes— y trabajaban en una tienda-hospital durante cuatro o cinco días. Algunos pacientes creían que la sarna o los piojos que los devoraban no eran sino una fatalidad de la naturaleza humana. Tan pronto como el tren llegaba, los pacientes comenzaban a hacer colas alrededor para conseguir que los curasen. Tuberculosis, paperas, silicosis (entre los mineros), hemos visto de todo, hemos intentado curarlo todo. Nuestro protésico ha hecho milagros. Solo, sin laboratorio, ha realizado cuarenta prótesis difíciles en treinta y un días. Hemos hablado a las gen-

tes, hemos desacralizado la idea del médico –ser superior–, hemos proyectado películas (prevención de la diarrea infantil), hemos instalado bombas de agua, les hemos dado una formación acelerada como socorristas (con el fin de que puedan solucionar lo más urgente)».

«En Teodoro-Schmidt, a las 2 de la mañana, la propia locomotora sirvió de ambulancia para transportar urgentemente a la ciudad a un niño muy gravemente deshidratado. En Cholchol, hemos visto un hospital moderno desierto por falta de personal médico...»

«Entre nosotros había socialistas, comunistas, gentes del MIR (izquierda revolucionaria) y del MAPU (disidentes democratacristianos de izquierda), pero la mayoría eran personas sin filiación política. Hemos trabajado como hermanos. Éramos felices».

Un informe de veintidós páginas ha sido enviado al Presidente Allende, quien también es médico

El próximo «Tren de la Salud» parte dentro de dos meses.

Le Monde, martes 25 de mayo de 1971

Los izquierdistas se oponen públicamente al legalismo del Gobierno

El Gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende no tenía hasta el momento «ningún enemigo a su izquierda». Es posible que esta situación no dure mucho. Por primera vez desde la llegada al poder de este Gobierno, el Secretario Nacional del MIR (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria) hace un llamamiento a obreros, campesinos, trabajadores y soldados para «denunciar las intrigas represivas y para impedir la resurrección del tristemente célebre grupo móvil de los carabineros» (Le Monde del 20 de mayo).

Hasta ahora, el MIR había adoptado para con el Gobierno una actitud de apoyo no incondicional pero sí al menos condescendiente. Al día siguiente de la victoria de Salvador Allende en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970, el MIR hizo autocrítica, mesurada pero claramente,

reconociendo que en esta ocasión «las urnas se habían impuesto a los fusiles».

Desde ese momento, fueron sus militantes quienes protegieron físicamente al candidato de la izquierda, quien salió victorioso de los atentados eventuales -hubo al menos dos que fueron abortados. Tampoco fue nada despreciable el papel del MIR en el descubrimiento del complot de extrema derecha que trataba de impedir que Allende asumiera el poder el 4 de noviembre. Dicho complot desembocó en el asesinato del General René Schneider, Jefe de Estado Mayor del Ejército, quien estaba decidido a hacer respetar la victoria electoral del candidato de la izquierda.

Desde noviembre de 1970, el MIR se puso en guardia en numerosas ocasiones contra el peligro de un «reagrupamiento de las fuerzas reaccionarias». Aunque sus militantes, perseguidos por el Gobierno anterior por «atentar contra la seguridad del Estado», fueran amnistiados por el nuevo régimen, el MIR no renunció a mantener, si no una cierta clandestinidad, al menos mucha prudencia en sus contactos oficiales o públicos. El MIR persiste en su idea de que «las fuerzas de reacción no han bajado la guardia» y que «el enfrentamiento será inevitable».

Por este motivo, ya desde los primeros meses de gobierno de Unidad Popular, su estrategia ha consistido en radicalizar lo más posible el proceso de transformación de las estructuras del país, de manera que se convierta en algo irreversible.

A lo largo del pasado verano, el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), filial del MIR, puso en práctica frente al Gobierno la «política de hechos consumados», procediendo a la ocupación de numerosos *fundos* (propiedades agrícolas) de una forma más rápida y a menudo más desordenada de lo que había previsto la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), a la que no le quedaba más que ratificar legalmente la iniciativa campesina mediante una «expropiación». Partiendo del sur, las ocupaciones expeditivas de los *fundos* se extendieron como una mancha de aceite hasta alcanzar la provincia de Santiago y provocaron por parte de los propietarios y de los sectores de oposición protestas contra la «ilegalidad de tales métodos».

Muy preocupado por su imagen legalista tanto en el interior como en el exterior, el Gobierno chileno se decidió a poner coto a tal situación. El domingo 16 de mayo, importantes fuerzas de la policía rodearon en la provincia de Santiago un *fundo* ocupado por campesinos rebeldes y expulsaron a los ocupantes tras detener a cinco de ellos.

Precisamente contra estos procedimientos se levanta el MIR. «Estos hechos, declaran, demuestran que el trabajo siniestro y tenaz de quienes detentan el poder y la riqueza está consiguiendo arrastrar a algunos funcionarios del Gobierno de Unidad Popular[...] contra los campesinos movilizados por reivindicaciones legítimas.» La declaración precisa, por otra parte, que el MIR aprecia en su justa medida el hecho de que el Gobierno «haya abierto las posibilidades de iniciativa y de movilización de los obreros» y añade que el Movimiento está dispuesto a resolver sus diferencias con el Gobierno mediante «un debate político que tenga como fin enfrentarse al enemigo común», pero afirma también que el deber de todos los trabajadores y de la izquierda es el de «denunciar, combatir y aplastar toda tentativa represiva antipopular que pudiera aparecer entre los sectores más vacilantes del Gobierno».

El Gobierno, dándose por aludido, no tarda en replicar. Daniel Vergara, Subsecretario de Estado de Interior, declaró: «Me remito a las palabras del camarada Presidente, quien ha recordado a menudo, en particular el 1 de mayo, que el Gobierno tiene no sólo la intención sino el deber de llevar a cabo todos estos cambios en el marco de la legalidad. No será ni la impaciencia de algunos ni la inmadurez o la conducta irreflexiva de otros lo que nos impida respetar el marco legal».

En un editorial titulado «No caer en la trampa», el diario *La Nación*, órgano oficioso del Gobierno, afirma: «La combatividad revolucionaria es una cosa y la histeria pseudorevolucionaria es otra. Combatir a los enemigos es una cosa y crearse nuevos adversarios es otra. Porque no debemos olvidar que aún tienen que unirse a nuestra causa amplios sectores alejados de nuestras tesis, sectores menos politizados e incluso movimientos que permanecen todavía ajenos a nuestra gran cruzada liberadora, pero que comparten muchos de nuestros objetivos».

Le Monde, miércoles 1 de junio de 1971

«Solo es el comienzo, continuemos el trabajo»

Los chilenos eligieron un domingo de mayo, durante el otoño austral, para organizar la primera Jornada Nacional del Trabajo Voluntario. La iniciativa partió de la Oficina de la Juventud del Gobierno, en respuesta a la llamada urgente que hizo el 1 de mayo el Presidente Allende para «ganar la batalla de la producción».

Dos millones de chilenos –cifras oficiales–, ni cortos ni perezosos, se lanzaron con buen humor a los trabajos más variados y a veces más insólitos.

Para dar ejemplo, el «camarada» Presidente de la República, encaramado a unas barracas en construcción, clavó unas vigas de contención en el campamento «Che Guevara». Era también un homenaje al autor de «Socialismo y hombre en Cuba», en el que se desarrollaba el tema del trabajo voluntario. Ernesto Guevara Lynch, padre del «Che», estaba presente y le pidieron que firmase algunas obras y «posters» de su hijo.

Los ministros se pusieron en mono de trabajo. El de Educación, Astorga, empezó a pintar la fachada de un colegio de secundaria. Cantuarias, Ministro de Minas, cogió el pincel en una escuela de párvulos. El ingeniero Pedro Vuskovic y el obrero mecánico Oyarce, el Primer Ministro de Economía, el Segundo Ministro de Trabajo, forzaron la ironía y fueron a trabajar a las máquinas de la fábrica textil Yarur, que pertenecía a uno de los grupos capitalistas más poderosos del país y que pasó recientemente a manos del Estado.

En la más pura tradición de la fraternidad ecuménica, fueron los jóvenes comunistas de las brigadas Ramona Parra, famosas por sus frescos murales, quienes se lanzaron al asalto del frontispicio de la catedral de Santiago para realizar una limpieza completa. En todo el país, estudiantes, jóvenes de la Democracia Cristiana, boy-scouts, se apresuraron a reparar, limpiar, plantar, construir.

Los setenta antiguos presos políticos brasileños refugia-

dos en Santiago desde el pasado mes de enero se propusieron, «en señal de gratitud y de solidaridad», rehabilitar una guardería. Por todas partes, las administraciones funcionaron. El Ejército mismo continuó, el domingo, sus trabajos de asistencia en los suburbios.

Paul Lafargue celebraba «el derecho a la pereza» del régimen capitalista. En un Chile en marcha hacia el socialismo, el trabajo se ha convertido hoy en un valor sagrado. La primera jornada de trabajo voluntario es el preámbulo de otras jornadas del mismo estilo. «Solo es el comienzo, continuemos el trabajo».

■ *El 8 de junio de 1971, el asesinato de Pérez Zujovic, antiguo Ministro del Interior del Gobierno Frei, viene a romper un clima de relativa tranquilidad en Chile.*

Se trata del segundo crimen político en ocho meses, desde el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, el General Schneider, en octubre de 1970. La Democracia Cristiana reclama la «disolución de todos los grupos armados que actúan al margen de la ley» y considera que «se ha abierto un período de crisis y de incertidumbre en el que peligra la paz social».

Allende estima, por su parte, que este atentado no buscaba más que «provocar un sentimiento de caos en un esfuerzo desesperado por destruir el orden público y lesionar el prestigio de Chile en el mundo». ■

Le Monde, miércoles 16 de junio de 1971

Tras la muerte de Pérez Zujovic
**El Gobierno de Allende ya no puede contar
con el apoyo de la Democracia Cristiana**

Trastornada por el asesinato del antiguo Ministro demócratacristiano Pérez Zujovic, la vida política chilena sigue siendo ciertamente confusa, si bien el clima es menos tenso. La captura espectacular, cinco días después del crimen, de la práctica totalidad de los miembros de la VOP (Vanguardia Organizada del Pueblo), autores del atentado, concederá al Gobierno un pequeño respiro. Sin embargo, la provincia de Santiago se encuentra bajo control militar, se mantiene el toque de queda y los órganos de prensa deben abstenerse de difundir cualquier noticia alarmista so pena de sanción. Por este motivo Radio Balmaceda ha sido clausurada durante veinticuatro horas.

La alerta ha servido para mostrar a Allende hasta qué punto el equilibrio de fuerzas estaba mal asegurado en el Parlamento y cuán frágil era el apoyo de la Democracia Cristiana, negociado el pasado mes de octubre sobre la base de una «garantía de las libertades democráticas». El asesinato del antiguo Ministro de Eduardo Frei ha abierto una contraofensiva de la Democracia Cristiana, promovida por su ala derecha (a la que pertenecía la víctima) y seguida por el Partido Nacional y la Democracia Radical, es decir, la derecha tradicional.

Si el Partido Demócratacristiano –que dista de ser un bloque bien cohesionado– parece atravesado por corrientes diversas, desde su derrota en las elecciones presidenciales de septiembre de 1970, las palancas de mando están en manos del ala derecha. Ahora bien, este ala representa más los intereses de los industriales, de los banqueros y de una parte de la clase media, que los del pueblo llano y del proletariado rural.

Desde el atentado del 8 de junio, hay varios hechos que confirman la hostilidad de la oposición parlamentaria a la política practicada por Allende. El mismo día del asesinato, se publicó un comunicado durísimo del Partido Demócratacristiano, en el que se explicaba el crimen por la debilidad del Gobierno, se protestaba contra «el clima de odio, de difamación y de violencia» propagado por los órganos de difusión «sometidos al poder», y

se recusaba a la policía civil, exigiendo que la investigación fuese llevada a cabo por los militares.

Ataques al Jefe de la Policía

En los días siguientes, ese ataque se precisó. En el transcurso de los debates suscitados en el Congreso por el atentado, los parlamentarios denunciaron la «parcialidad» de la cadena nacional de televisión y atacaron a Paredes, Director General de la Policía, quien, según el senador Osvaldo Olguín, hablando en nombre del Partido Demócratacristiano, «habría tenido algo que ver con el MIR (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria) y con la VOP (Vanguardia Organizada del Pueblo)». Mientras que el Gobierno solicitaba el acuerdo de los diputados para contratar a mil «carabineros» suplementarios (es el nombre de los guardias del orden público en Chile), los demócratacristianos, seguidos por el Partido Nacional, subordinaron su voto a la disolución de todos «los grupos armados», exigencia que formulaban por segunda vez.

Este endurecimiento de la oposición se manifestó de una manera significativa con la presentación de una moción de censura contra la oficina de la Cámara de los Diputados, compuesta actualmente por tres miembros de la Unidad Popular. Si los demócratacristianos afirman que esta moción de censura tiene un carácter administrativo y no político, los «nacionales», por el contrario, que vienen preconizando esa medida desde hace varias semanas, no ocultan su satisfacción. La votación, que tendrá lugar el martes 15 de junio, y que puede poner a la cabeza de la Cámara una oficina «opositora», *«demostrará, —dicen los demócratacristianos— que las fuerzas democráticas son mayoritarias en el país»*.

Otros dos indicios confirman una cierta pérdida de velocidad de la Unidad Popular. En las elecciones que se celebraron la semana pasada en la Universidad de Chile para elegir una nueva dirección, quien venció fue un candidato independiente, Edgardo Boeninger, «compañero de camino» de la Democracia Cristiana, si bien es cierto que lo hizo con una mayoría débil (52%) sobre Eduardo Novoa, jurista de talento, apoyado por todas las fuerzas de la izquierda. Ahora bien, la «comunidad» de la Universidad de Chile —cerca de sesenta y cinco mil miembros— representa una gran potencia en la vida intelectual y política de Chile.

Más aún. Si bien el sábado se solicitó una pena de quince años de cárcel para el ex General Viaux, acusado de complicidad en el asesinato del General Schneider en octubre de 1970, muchos otros inculcados que comparecieron ante el Tribunal Militar de Santiago salen bastante bien parados, con penas que la izquierda deplora por considerarlas excesivamente leves. Algunos acusados, que parecían seriamente comprometidos, son pura y llanamente absueltos. «Los conspiradores son puestos en libertad», escribe un periódico socialista.

Es evidente que el asesinato de Pérez Zujovic ha creado un clima del que los sectores más hostiles al Gobierno pretenden sacar el máximo partido. En el seno de la Democracia Cristiana, los «derechistas» han lanzado duros ataques contra el dirigente de las juventudes, Luis Badilla, conocido por su actitud conciliadora con la Unidad Popular, llegando a calificarlo de «traidor que debería solicitar su ingreso en el MAPU» (el MAPU es un movimiento formado por antiguos disidentes de izquierda de la Democracia Cristiana, cuya orientación es cada vez más «pro-marxista»).

Ciertas personalidades de la Democracia Cristiana mantienen la cabeza fría: Tomic, candidato desafortunado en las elecciones presidenciales, asistió en un lugar de honor a las exequias de Pérez Zujovic, pero se reservó todo comentario. Un diputado, Bernardo Leighton, antiguo Ministro del Interior de Frei, que antecedió a su colega asesinado, visitó *motu proprio* a Allende en el Palacio Presidencial de la Moneda y se negó a asistir al concierto antigubernamental. De momento, el ala izquierda de la Democracia Cristiana, cuya posición es incómoda, deja pasar la tormenta.

¿Un complot organizado en el extranjero?

Varios comunicados oficiales tienden a reforzar la imagen de un complot urdido desde el exterior. A pesar de las notas de la autoridad militar prohibiendo las especulaciones en torno al atentado, los periódicos de izquierdas apuntan a la CIA. El MAPU recuerda que fue precisamente en la época del Gobierno de Frei cuando se constituyeron todos los grupos extremistas cuya existencia deplora hoy la Democracia Cristiana, en particular el grupo de extrema derecha «Fiducia» y el grupo «Patria y Libertad». En la Cámara, el Ministro de Defensa dio lectura a una nota anónima transmitida por el Estado

Mayor Militar, en la que se lee lo siguiente: «*Nosotros, un grupo de suboficiales, exigimos que no se siga apoyando al Gobierno y que se provoque su caída por el bien de la patria*».

Desde el principio de su mandato, Allende no ha tenido reparo en afirmar que si bien el Gobierno había conquistado el poder legal, estaba lejos de disponer del poder político. Hasta la fecha, ha conseguido comprometer al país por la vía de una cierta nacionalización de los medios de producción, colisionando con los intereses de la burguesía financiera e industrial, vinculados a menudo con los intereses extranjeros. Pero no ha llegado a satisfacer a los grupos revolucionarios, impacientes por radicalizar el proceso, que elevan sus protestas contra la instalación de un nuevo «capitalismo de Estado».

El Gobierno es el primer interesado en arrojar luz lo antes posible sobre los verdaderos móviles de los miembros de la VOP, curiosamente resucitada, cuya actividad revolucionaria ha consistido hasta hoy en algunos robos y en el asesinato de Pérez Zujovic.

Le Monde, sábado 19 de junio de 1971

La oposición se reagrupa y espera a su líder, Frei

Los extremistas chilenos han intentado el jueves 17 de junio una nueva operación: volar, en Santiago, un coche de policía que conducía a la comisaría central a un miembro de la Vanguardia Organizada del Pueblo, la organización considerada como responsable del asesinato, el 8 de junio, del antiguo Ministro demócratacristiano del Interior, Pérez Zujovic. Las bombas lanzadas hacia el vehículo no han explotado, y uno de los asaltantes ha sido capturado. Según la policía, este último habría querido reducir al silencio al hombre que era conducido a la comisaría.

«El asesinato de Pérez Zujovic es un golpe directo contra el Gobierno, aunque humana y políticamente haya herido a la Democracia Cristiana.» En estos términos se dirigía a la muche-

dumbre reunida el miércoles 16 de junio, en Santiago, ante la convocatoria de la CUT (Central Única de los Trabajadores) el Presidente de la República, Salvador Allende, y definía así el momento difícil por el que atraviesa su Gobierno.

De hecho, todas las pasiones contenidas, todas las irritaciones acumuladas a lo largo de los últimos siete meses, se han despertado en el seno de la oposición al Gobierno de Unidad Popular. Son muchos los que se plantean ya una especie de reagrupamiento de la Democracia Cristiana, del Partido Nacional (conservador) y de la Democracia Radical contra la «coalición marxista» acusada de haber tolerado de forma pasiva la existencia de «grupos armados», incitándolos así a la violencia, como es el caso de la VOP (Vanguardia Organizada del Pueblo), responsable del atentado del pasado 8 de junio.

Eduardo Frei, Presidente saliente de la República, podría ser, él mismo, el líder de este reagrupamiento. Precisamente ha acortado su viaje europeo para regresar el viernes 18 de junio de Londres y participar, este domingo, en un gran mitin organizado en su honor.

Frei mantenía una gran amistad con Pérez Zujovic, pero tampoco ocultó nunca su hostilidad hacia las primeras medidas de socialización adoptadas por Allende. Puede contar a la vez con fervientes amigos en el seno del ala derecha que dirige su partido, y con la simpatía del Partido Nacional, que quiere olvidar por el momento sus antiguas diferencias con él para hacer frente al «enemigo común».

La violencia en la derecha y en la izquierda

Y precisamente en relación con la disolución de los «grupos armados», la posición del Gobierno es muy delicada. *«Nosotros no tenemos armas, –declaró el Presidente a los trabajadores en su discurso del miércoles– pero tenemos el arma extraordinaria que representa la fuerza del obrero, del campesino, del estudiante, al lado de las Fuerzas Armadas, pilares de la defensa del régimen»*. Efectivamente. Y sin embargo, en este Chile tan respetuoso con la legalidad, tan susceptible en lo que toca a la Constitución, parece que los grupos armados son más numerosos de lo que se podría imaginar, pero no todos son de izquierdas, ni mucho menos. En este terreno, la extrema derecha tiene una larga tradición, desde la época hitleriana en la que el Movimiento Revolucionario Nacionalsocialista, que se nutría de

la colonia alemana, muy importante en Chile, lucía públicamente camisa parda y cruz gamada.

Por ello la prensa de izquierdas, descontenta con la insignificancia de las penas reclamadas por el Tribunal Militar para los asesinos del General Schneider, el Comandante en Jefe del Ejército chileno asesinado el 22 de octubre de 1970, consideraba, el miércoles, insuficientes los tres años de cárcel impuestos al asesino del militante demócratacristiano Hernán Mery. Este último, Jefe de zona de la CORA (Corporación de Reforma Agraria) fue asesinado el año pasado, cerca de Talca, a doscientos kilómetros al sur de Santiago. Este atentado, que escandalizó en su momento a todo el partido demócratacristiano, fue organizado, según parece, por el grupo clandestino de derechas «Trinchera», especializado en la defensa de los *fundos* (propiedades agrícolas).

Así pues, la violencia se encuentra tanto en la derecha como en la izquierda. Precisamente uno de los problemas del socialismo «a la chilena» es el de querer transformar la sociedad y conducirla hacia el socialismo sin salirse del marco legal.

«Las gentes de la VOP son falsos revolucionarios, —añadió Allende— Son sobre todo revolucionarios mezclados con delinquentes[...]. Lenin dijo que «el espontaneismo y el terrorismo no tienen nada que ver con el movimiento obrero.»»

El Gobierno sostiene la tesis de una infiltración de la extrema derecha o incluso de la CIA en la VOP. Por el momento, hay varios hechos que refuerzan esta tesis. Tres de los miembros de la VOP actualmente detenidos son extranjeros: se trata de un argentino, un japonés y una mejicana, llegados hace tres meses de Méjico, centro activo de la CIA y del espionaje anticubano. Por otra parte (Allende ha recordado la coincidencia), unos cheques robados por un grupo fascista que dirige un estudiante de la Universidad Católica, Nelson Aramburu, han sido encontrados entre los objetos personales de Ronald Rivera Calderón (uno de los tres asesinos).

Y además —según manifiesta la revista centrista *Ercilla*—, uno de los miembros más influyentes del grupo es un tal Pérez Azócar, antiguo suboficial del Ejército chileno conocido por su crueldad, quien recibió la formación de los comandos antiguerrilla, entrenados en Panamá por el Ejército americano.

Pero los miembros de la Unidad Popular no son unánimes en sus sentimientos hacia los activistas de extrema izquierda: algunos de ellos, confidencialmente, confiesan una cierta admiración por el valor del último camicace, Heriberto Salazar Bello,

quien se «dinamitó» espectacularmente a sí mismo después de matar a tres inspectores de policía. El MIR (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria), condenando enérgicamente los atentados individuales, indica que Ronald Rivera fue «empujado por un odio de clase instintivo», lo cual alejaría la idea de una acción auténticamente dirigida por terceros. En la Cámara, el diputado socialista Mario Palestro, conocido por su franqueza, ha llegado a declarar (según el periódico *El Mercurio* que recoge sus declaraciones): *«Nosotros, socialistas, respetamos el heroísmo de estas gentes de la VOP. Que vayan por mal camino, esa es otra cuestión»*. Y, haciendo alusión a la «masacre de Puerto-Montt»⁵, cuya responsabilidad fue atribuida al antiguo Ministro del Interior: *«Esos terroristas valen mucho más que él (Pérez Zujovic), que tiene en su haber la muerte de ocho mendigos a los que nadie ha rendido homenaje»*.

Por el momento, «el caos y la anarquía» que, según las acusaciones, los «grupos armados» quieren provocar, no existen en Chile. Si el estado de excepción se mantiene durante veinticuatro horas, el toque de queda, en cambio, se ha suprimido. La auténtica batalla se va a librar en el Congreso. Es el terreno en el que la Unidad Popular conoce su debilidad.

⁵ El 8 de marzo de 1969, la policía disparó sobre un comando de «ocupas» instalados en una propiedad privada en Puerto Montt, al sur de Chile, provocando ocho muertos y veinticinco heridos.

Le Monde, martes 6 de julio de 1971

El Congreso debe pronunciarse sobre la nacionalización del cobre

Un debate muy importante tendrá lugar el 11 de julio en el Congreso chileno. Diputados y senadores deben aprobar la enmienda constitucional que permitirá la nacionalización de la gran industria del cobre. Aunque la crisis provocada por el asesinato de un antiguo ministro del Gobierno de Eduardo Frei ha modificado las relaciones entre la Democracia Cristiana y el Gobierno de Unidad Popular, la enmienda será adoptada sin duda por unanimidad.

Por otra parte, el antiguo General Roberto Viaux, implicado en el asesinato, en octubre de 1970, del General René Schneider, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ha reconocido haber encabezado un complot encaminado a impedir que Salvador Allende alcanzase el poder.

Desde el asesinato de Pérez Zujovic, antiguo Ministro del Interior demócratacristiano, el Gobierno de Unidad Popular está, políticamente, más bien a la defensiva, si bien prosigue su acción en el plano económico. A este respecto, se muestra optimista, a pesar de aquellos que consideran como transitoria la buena situación actual. En todo caso, los créditos no faltan. Clodomiro Almeyda, Ministro de Asuntos Exteriores, se ha traído de su visita por Europa del Este el equivalente de doscientos treinta millones de dólares en créditos, de ellos cien millones en ayuda técnica y ciento treinta millones en «créditos abiertos». Joao Oliveira, Presidente de la comisión ejecutiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha declarado que este organismo no pretendía suspender sus préstamos a Chile, a pesar de la orientación socialista de este país.

Finalmente, Javier Urrutia, director de la oficina de la CORFO en Nueva York, la Agencia del Desarrollo Económico del Estado chileno, ha precisado que los banqueros norteamericanos seguían dispuestos a conceder a Chile créditos por un montante de unos ciento ochenta millones de dólares, lo cual no excluye, por su parte, una gran prudencia a la

espera de los acuerdos definitivos sobre la nacionalización del cobre, que definirán las modalidades de indemnización ofrecida a las compañías norteamericanas.

Producción de cobre

El próximo 11 de julio, al término de las múltiples «idas y venidas» entre las dos Cámaras, el Parlamento debe ratificar la reforma constitucional que permitirá la nacionalización del cobre, materia prima de la que el país obtiene el 80% de sus divisas. «En 1971, la producción alcanzará la cifra récord de ochocientos cuarenta millones de toneladas», ha subrayado el director de la Corporación del cobre (CODELCO), Max Nolff.

Por otra parte, el Presidente de la República, Salvador Allende, ha anunciado que el «sector socializado de la economía» estaría constituido definitivamente antes de final de año. Los bancos, las empresas industriales y comerciales más importantes, estarán entonces bajo el control absoluto del Estado. Al mismo tiempo, una nueva política de créditos debería ayudar a la mediana industria y al artesanado en su desarrollo. El aumento del consumo continúa, lo cual, en buena lógica, debería estimular la producción y, por consiguiente, permitiría reducir el paro.

Si el balance de los ocho primeros meses del Gobierno parece positivo, Chile debe luchar decididamente contra el subdesarrollo.

En las ciudades, la mayoría de la población vive en chabolas frágiles. Las fábricas están a menudo en condiciones precarias. Por este motivo la «batalla de la producción» sigue siendo la preocupación esencial de Allende. Corvalán, Secretario General del Partido Comunista, también ha confirmado que esta batalla es el objetivo número uno: *«La batalla de la producción es ante todo una batalla política»*, ha dicho. Ha pedido a los militantes que creen por todas partes «Comités de control» y «Comités de producción», *«células de base en las que los trabajadores inicien su participación en la gestión de las empresas del sector socializado»*.

¿La violencia inevitable?

Los socialistas, que se sitúan en el ala derecha de la coalición de la Unidad Popular, hacen un análisis sensiblemente diferen-

te. En un documento publicado casi en su totalidad por el periódico *El Mercurio* (conservador), la comisión agraria del Partido Socialista precisa que, durante la campaña para el desarrollo, «es preciso insistir más en su contenido político que en el aumento de la producción y de la productividad [...]».

La elección de un diputado, el 18 de julio, en Valparaíso, primer puerto chileno, servirá de prueba. Trescientos ochenta mil electores deberán decidir entre el doctor Marín, presentado por la Democracia Cristiana, apoyado por el Partido Nacional (conservador) y la derecha en su conjunto, y Hernán del Canto, Secretario General de la CUT (Central Única de los Trabajadores), candidato de la Unidad Popular. Esta confrontación permitirá medir de nuevo el equilibrio de fuerzas entre la izquierda y la oposición, reagrupada en torno al Partido Demócratacristiano.

■ *El 11 de julio de 1971, por votación unánime del Congreso, las minas de cobre chilenas pasan a ser propiedad «absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible» del Estado, que se convierte también en dueño del carbón y de los hidrocarburos.*

Esta nacionalización del cobre – mineral cuya exportación proporciona el 80% de los recursos en divisas del país– tiene un significado simbólico muy fuerte.

Era una de las medidas previstas en el programa de la Unidad Popular. Algunos periódicos afirman que por fin «Chile se ha vestido de largo». ■

Tras la nacionalización del cobre
**Las negociaciones con los Estados Unidos
 serán difíciles**

«El 11 de julio de 1971, día de la Dignidad Nacional, marcará la fecha histórica de nuestra segunda independencia»: así es como los periódicos celebraban estas últimas semanas la nacionalización del cobre, «piedra angular» de la economía chilena. La enmienda a la Constitución votada el domingo 11 de julio en Santiago que modifica el derecho de propiedad, sanciona el derecho inalienable del Estado a disponer de los recursos naturales. Supone un paso adelante en la política «antiimperialista» de la coalición de la Unidad Popular.

Con seiscientas cincuenta mil toneladas extraídas en 1970, Chile es el cuarto productor mundial de cobre (detrás de los Estados Unidos, la URSS y Zambia) y el segundo exportador (inmediatamente después de Zambia). Sus reservas (noventa y dos millones de toneladas) lo colocan en primera fila. La venta de cobre (ochocientos millones de dólares al año) representa el 80% de los recursos en divisas: según la expresión de Allende, es el «salario del país».

La nacionalización, que entró en vigor el lunes, afecta directamente a tres grupos norteamericanos. En el norte, en pleno desierto de Atacama (a mil quinientos kilómetros de Santiago), Anaconda Copper Corporation controlaba tres minas: El Salvador, Exótica y Chuquicamata. A dos mil quinientos metros de altitud, esta última es la mayor explotación a cielo abierto que cuenta con las reservas más importantes. En el centro de la cordillera de los Andes, Kennecott Copper Corporation explotaba la mayor mina subterránea del mundo (El Teniente), y Cerro Corporation controlaba el abundantísimo yacimiento de la Andina.

A partir de ahora es CODELCO (Corporación del cobre), organismo gubernamental, la empresa que se ocupará de la explotación del sector de las «grandes minas», «como lo hace la EDF francesa», según Silberman, Subsecretario de Minas. CODELCO ya ha publicado un documento que pone de relieve la despro-

porción existente entre las inversiones efectuadas por las dos compañías americanas más poderosas y sus beneficios: con el 16,64% de sus inversiones, Anaconda obtenía de sus minas chilenas el 79,24% de sus beneficios; con el 13,16% de sus inversiones en Chile, Kennecot obtenía el 21,37%.

Evidentemente, las discusiones entre norteamericanos y chilenos serán más delicadas en lo tocante a la cuestión de la indemnización. El proyecto de reforma presentado por el Gobierno preveía indemnizaciones hasta treinta y un años y a una tasa anual de interés inferior o igual al 3%, así como la creación de un Tribunal de Arbitraje en el que los miembros del Gobierno fuesen mayoritarios.

Pero a lo largo de las múltiples «idas y venidas» entre las dos Asambleas, cada término del proyecto ha sido cuidadosamente sopesado con el fin de evitar cualquier recurso por parte de los abogados de las sociedades. Así pues, la tasa anual de interés no podrá ser inferior al 3%. Los miembros del Gobierno no serán forzosamente mayoritarios en el Tribunal de Arbitraje (se aumenta el número de magistrados, independientes del poder del Estado). Y, por último, la indemnización se basará en el valor de la mina a 31 de diciembre de 1970, deduciendo las revalorizaciones calculadas desde diciembre de 1964.

Un gigante enfermo

Por otra parte, CODELCO afirma que, desde la victoria de la Unidad Popular en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970, las compañías americanas han «saboteado» la producción. Ni Anaconda ni Kennecot han pagado aún los dividendos que le corresponden a Chile y que alcanzan la cifra de ochenta millones de dólares. Han cesado el abastecimiento de repuestos. El gerente de la mina El Teniente, el americano Haldeman, ha hecho las maletas hace algunos días sin avisar de la situación. La negligencia en la gestión ha elevado el costo de la producción a un nivel tal que el Gobierno chileno se ha visto obligado a intervenir con los medios legales a su disposición. Desde ahora, la producción de este yacimiento acusará un cierto déficit, al menos este año.

En su discurso del 11 de julio en Rancagua, cerca de la mina El Teniente, Allende ha expuesto los resultados de una investigación llevada a cabo desde hace un mes por la sociedad francesa Sofremine, a petición del Gobierno chileno. Según los

expertos franceses, las instalaciones de Chuquicamata están en mal estado y necesitan reparaciones por un montante de treinta millones de dólares. Más aún. La explotación anterior solo se ha ocupado de los filones más ricos. Ha dejado acumularse sesenta millones de toneladas de residuos que habrá que retirar, y ello supondrá unos gastos muy elevados. Sin estas medidas, la explotación no podría continuar a cielo abierto más allá de cuatro años. «*Chuqui es un gigante enfermo*», ha declarado Salvador Allende.

■ *El 31 de julio de 1971, en protesta contra la «derechización» de su partido, ocho diputados demócratacristianos, a los que no tardan en unirse otros compañeros, se escinden y entran a formar parte de la Unidad Popular bajo el nombre de «Izquierda Cristiana».*

En el otro frente, once parlamentarios radicales abandonan la coalición de la UP excesivamente «marxista» para su gusto, aunque mantienen su solidaridad con el Gobierno. Incluso algo debilitado, el Partido Demócratacristiano sigue siendo la formación esencial, y ello le hace endurecer sus posiciones.

Y es que, desde el principio, el Gobierno de Allende se empeñó en modificar las estructuras económicas del país tan rápidamente como lo permitía la legalidad burguesa: nacionalización de la banca, de las «riquezas de base», control de una parte del comercio exterior agrícola, del sector textil, aceleración de la reforma agraria, bloqueo de los precios y aumento de los salarios, sin que la inflación se resienta realmente... Este proceso de «transición hacia el socialismo» solo podía hacerse en caliente, cuando la oposición estaba todavía desarmada tras su derrota y el apoyo popular estaba en su apogeo.

Sin embargo llega el momento en que tal proceso se topa con los límites del sistema, pues la Unidad Popular no dispone todavía de la mayoría en la Cámara. El aparato judicial y militar escapan al Gobierno y tanto el carácter «plural» de la coalición de la UP como las garantías constitucionales prometidas al inicio del mandato prohíben al Presidente Allende ir más rápido. Todo lo contrario, es preciso contemporizar. ■

Le Monde, sábado 7 de agosto de 1971

La huelga de los mineros del cobre preocupa a las autoridades

Tras las escisiones que se han producido en el seno del Partido Demócratacristiano y del Partido Radical (*Le Monde* del 5 de agosto), que forma parte de la Unidad Popular, se ha producido una nueva disidencia en una segunda formación de la coalición gubernamental, el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU): Jacques Chonchol, Ministro de Agricultura, así como los tres parlamentarios del partido (dos senadores y un diputado), han presentado la dimisión. Se alistarán en el Movimiento de la Izquierda Cristiana (MIC), fundado por los disidentes del Partido Demócratacristiano.

«No puedo entenderlo.» En el transcurso de una conferencia de prensa, el 5 de agosto, el Presidente Allende no ha ocultado su consternación y su irritación ante el hecho de que, tres semanas después de la nacionalización de la gran industria del cobre, cuatro mil quinientos trabajadores del complejo minero de El Salvador Potrerillo (a unos mil kilómetros al norte de Santiago) prosigan, desde el domingo pasado, una huelga general a causa de una serie de reivindicaciones salariales.

Cantuarias, Ministro de Minas (radical), y Oyarce, Ministro de Trabajo (comunista), regresaron con las manos vacías de una visita al lugar del conflicto: las negociaciones están en punto muerto. Los obreros reclaman un aumento del orden del 45%. El Estado, nuevo patrón, considera que no puede ofrecer más del 33%, «pues de otra manera, dijo el Ministro de Minas, iríamos directamente a la bancarrota. Y todo ello porque un descenso artificial del precio internacional del cobre está haciendo en este momento que el coste de producción sea igual al precio de venta».

El Secretario General de la Central Única de los Trabajadores (CUT), Hernán del Canto, candidato derrotado en la diputación de Valparaíso, va a intentar a su vez detener una huelga que le resulta excesivamente cara al país. «Vuestro regreso al trabajo no sería una derrota sino un triunfo del espíritu de solidaridad hacia el conjunto de los trabajadores chilenos y de la causa revo-

lucionaria», acaba de declarar a los huelguistas del Comité de Unidad Popular de Santiago, de CODELCO (Corporación del cobre).

Allende ha subrayado que a diferencia del Gobierno de Frei, que había provocado varias muertes al intentar reprimir una huelga de los mineros de El Salvador, el Gobierno revolucionario *«no aplicará una política de mano dura... Pero los mineros deben comprender que forman parte del Gobierno [...] Yo iré personalmente para imponer mi autoridad moral».*

Hace ya algunas semanas, el Gobierno tuvo que ceder ante una reivindicación salarial formulada por los trabajadores de las minas de carbón de Lota-Schwager, cerca de Concepción, al sur de Santiago. El MIR (izquierda revolucionaria) había provocado una huelga que no duró más que dos días. Sin embargo, en ese momento el Estado era todavía accionista mayoritario, pues una parte importante de las acciones de la mina pertenecía aún a particulares.

El conflicto de El Salvador, que viene a producirse bajo un régimen «en vías de socialización», genera uno de los problemas de fondo de lo que los marxistas llaman «período de transición hacia el socialismo». ¿Desaparece la explotación de los trabajadores por el hecho de que sea el Estado el dueño absoluto del aparato de producción? Los huelguistas de El Salvador demuestran que eso no es así. De hecho, en el seno de la clase obrera chilena, los mineros del cobre, hasta ahora administrados por sociedades norteamericanas, son unos «privilegiados»: grandes sueldos, cooperativas abastecidas con productos americanos, numerosos servicios sociales, prestigio de una industria admirada, etc. Tal vez se trate incluso, en la medida en que la acusación proviene de un periódico socialista de Santiago, de una maniobra por parte de los demócratacristianos en el sector de los «asalariados» de la mina, del que son mayoría. Sin embargo, el problema teórico y práctico está por resolver.

¿El Gobierno de Unidad Popular está en condiciones de movilizar al país en la «batalla de la producción», y respetar las reglas de la democracia? El Estado, incluso socialista –aún no es el caso de Chile–, sigue siendo un patrón. Pero, ¿hay buenos patrones? La experiencia de El Salvador demostrará, en los próximos días, cómo el Estado-patrón chileno va a salir de esta delicada situación.

Le Monde, jueves 30 de septiembre de 1971

Salvador Allende excluye prácticamente cualquier indemnización a las sociedades norteamericanas nacionalizadas

Probablemente Chile no abonará ninguna indemnización a las compañías norteamericanas de cobre nacionalizadas el pasado mes de julio. Al menos es lo que se deduce de las declaraciones efectuadas el martes 28 de septiembre en Santiago por el Presidente de la República, Salvador Allende, quien anunció que su Gobierno deduciría una cantidad de setecientos setenta y cuatro millones de dólares del total de las indemnizaciones que debían realizarse a las tres compañías norteamericanas expropiadas, en razón de sus «beneficios excesivos» durante los dieciséis últimos años. Ahora bien, esta cantidad es superior al total previsto en indemnizaciones (setecientos millones de dólares). Dicho de otro modo, las sociedades no verán ni un duro. Se trata de la primera indicación oficial acerca de las laboriosas negociaciones iniciadas hace casi un año por el Gobierno de Santiago con los representantes de los intereses privados norteamericanos. La decisión de los dirigentes de la Unidad Popular, la coalición gubernamental, va a suponer sin duda una seria dificultad en el futuro de las relaciones con los Estados Unidos. En Washington, los medios económicos así como el Departamento del Tesoro han hecho de la indemnización de los bienes americanos la condición previa a cualquier política de ayuda económica y financiera a Chile. Ya en agosto, el Banco de Importación y Exportación denegó un crédito de veintiún millones de dólares al Gobierno de Santiago para la compra de tres Boeing. Chile ya no figura entre los países de América Latina para los que Washington tiene previsto cada año un programa de «asistencia».

Batalla política en torno a la libertad de expresión

Tras haber declarado en varias ocasiones, la semana pasada, que su decisión de clausurar los servicios norteamericanos de la agencia United Press en Chile era «irrevocable» (*Le Monde* del 18 de septiembre), el Gobierno ha rectificado esta medida de una forma imprevista y bastante discreta, a través de un comunicado difundido a las doce de la noche de ayer (en la noche del sábado 25 al domingo 26 de septiembre).

El anuncio del cierre de UPI había provocado, por el contrario, un cierto escándalo. El 15 de septiembre, en el transcurso de un mitin popular organizado por la Central Única de los Trabajadores ante el Palacio Presidencial de la Moneda, Allende criticó duramente la «*distorsión de la verdad*» imputable a la agencia de información. No se trataba sino del «complot sedicioso» denunciado por el Gobierno (*Le Monde*, con fecha 26-27 de septiembre).

Más tarde, el Ministro del Interior, Toha, explicó a los miembros de la Asociación de corresponsales de prensa extranjeros que las informaciones de UPI parecían «una campaña que cuestionaba la seguridad del Estado». Las quejas reales se centraban en una serie de noticias de alcance según las cuales, durante su reciente gira por América Andina, Allende se habría entrevistado con miembros de la oposición colombiana, al tiempo que un avión de la escolta presidencial habría procurado algunos aprovisionamientos a los guerrilleros colombianos.

Hoy el Gobierno, manifestando que su intención es la de «facilitar el ejercicio de la libertad de prensa sin ningún género de restricciones», explica que la anulación de dicha medida se debe al compromiso adquirido por McCall, vicepresidente de UPI para América Latina, de difundir un desmentido de las noticias en cuestión, así como a la preocupación de las autoridades por no llevar al paro a los treinta empleados chilenos de la agencia. Por otra parte, se exige el cese del director norteamericano de la oficina de Santiago, por entender que «su conducta ha sido inaceptable».

Controversia sobre la televisión

El cambio del Gobierno está ciertamente motivado por el deseo de demostrar a la opinión pública internacional que Chi-

le, velando –como indica el comunicado– «por el respeto de la dignidad, el prestigio y el interés del país», es una nación en la que la libertad de prensa es total. De hecho, se ha desatado una controversia sobre el control de los medios de expresión. La extrema derecha defiende que la libertad de expresión ya no existe, y cita como ejemplo que el director de un periódico del sur (*El Cóndor*), Maximiano Errazuriz, habría sido detenido y torturado por la policía por haber escrito en un editorial que Salvador Allende es «el carnicero de Chile».

Tal vez nunca, ni siquiera en período de campaña electoral, los periódicos, la prensa hablada y la televisión habían adoptado un tono tan acalorado ni posturas tan rigurosas. «Totalitarismo en los medios de comunicación», titula el periódico *El Mercurio* (conservador), en un editorial que fustiga el «poder avasallador» del Gobierno en materia de radio y de televisión.

En Chile, la televisión es compartida esencialmente por tres cadenas: una de ellas, la cadena núm. 7, está controlada por el Estado. Es la única que dispone de una costosísima red nacional de retransmisión, en razón de la configuración accidentada del país. En principio esta cadena nacional está abierta a la oposición. De hecho, la influencia de la Unidad Popular se ha dejado notar, a menudo de manera poco sutil. Las otras dos cadenas, ubicadas en Santiago, dependen directamente de las dos principales universidades: la Universidad de Chile (cadena núm. 9) y la Universidad Católica de Santiago (cadena núm. 13).

La primera es de tendencia Unidad Popular, la segunda de tendencia más bien demócratacristiana. Hasta el momento, ni la una ni la otra tenían el privilegio de extender su red más allá de Valparaíso, es decir, en un radio de un centenar de kilómetros alrededor de Santiago. Recientemente, la cadena de la Universidad Católica ha solicitado autorización para instalar una serie de antenas, con el fin de aumentar su audiencia primeramente en el valle central, que es la zona más poblada de Chile, y más adelante en todo el país. El Gobierno ha planteado un veto categórico a esta demanda. De ahí las protestas y las manifestaciones contra lo que se considera como un «atentado a la libertad de expresión».

En realidad, si bien los argumentos del Gobierno son de carácter económico (apela al coste elevado de la operación), el problema es fundamentalmente político. La coalición de la Unidad Popular no se plantea ofrecer a la oposición la posibilidad de utilizar, a escala nacional, un medio de comunicación tan importante como es la televisión. El Gobierno ha hecho, no obstante,

una contraoferta: crear una segunda cadena nacional, esta vez universitaria, pero que sea utilizada concertadamente por la cadena núm. 9 y la cadena núm. 13, es decir, por los partidarios de la Unidad Popular y por sus adversarios.

Verdaderamente, sería falso afirmar que no hay libertad de expresión en Chile. Basta con recorrer los periódicos o encender la radio para constatar que circulan las corrientes de opinión más opuestas. Pero es igualmente cierto que la coalición de la Unidad Popular aumenta progresivamente el número de sus órganos de difusión.

Como propietario de la principal editorial de Chile, denominada *Quimantu* (antes *Zigzag*), el Gobierno ha lanzado últimamente varias revistas destinadas tanto a adultos, adolescentes y niños, como a las familias pobres de las «poblaciones» (chabolas que rodean las ciudades). Por otra parte, la publicidad de los diferentes organismos oficiales, fuente de ingresos nada desdeñable, se viene concediendo únicamente a los periódicos afines al Gobierno.

Todo esto ocurre relativamente en buena lid. Hace un año, la situación era justamente la inversa, con la diferencia, tal vez, de que el didactismo y el proselitismo no eran si duda tan llamativos ni desafortunados como lo son hoy. Sin embargo hay que señalar algunos «golpes bajos»: desde hace algunos días, la longitud de onda de una emisora de radio demócratacristiana, *Radio Balmaceda*, está ocupada, a partir de medianoche, por la emisora Recabarren, que pertenece a la Central Única de los Trabajadores, quien la reclama desde hace mucho tiempo y sin éxito. «El contrato de Radio Balmaceda ha finalizado. Esta emisora debe volver a los trabajadores», dice la CUT. En efecto, la manera de expresar esta reivindicación no deja de ser insólita.

Pero otro hecho amenaza con romper el «gentleman's agreement» que existe entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular desde el «pacto» sobre las garantías constitucionales, asumido hace ahora un año por las dos formaciones, y que acaba de ser refrendado por el Parlamento, en donde los demócratacristianos han rechazado una acusación formulada por la derecha contra el Ministro de Economía.

De hecho, la prensa gubernamental ha explotado ampliamente el pequeño escándalo que, ante sus ojos, constituía la amistad que unía al antiguo Presidente de la República, Eduardo Frei, con un antiguo funcionario de la Corporación del Medio Ambiente, quien huyó del país tras haber estafado cien mil dólares. Ante esta campaña, Frei ha abandonado el silencio que man-

tenía desde abril y ha denunciado «al Partido Comunista, que quiere manchar el nombre de todos cuantos se oponen a la implantación de su dictadura funesta». Furiosos por los ataques «bajos y desleales» contra su líder, los dirigentes democratacristianos exigen explicaciones al Gobierno.

Le Monde, viernes 8 de octubre de 1971

LA NACIONALIZACIÓN DEL COBRE

La negativa a indemnizar a las sociedades americanas satisface a la extrema izquierda

Negando en la práctica las indemnizaciones a las compañías norteamericanas de cobre que han sido nacionalizadas (*Le Monde* del 30 de septiembre), Allende ha arrebatado un argumento de peso a los partidarios de la Unidad Popular que dudan del carácter revolucionario de la política «legalista» practicada por el Gobierno.

Fundamentado en un aparato legal irrefutable, Allende ha anunciado, el 24 de septiembre, su decisión de descontar del total de las indemnizaciones setecientos setenta y cuatro millones de dólares de «beneficios excesivos», lo cual equivale de hecho a suprimir cualquier pago.

Por este motivo, tal decisión es calificada de «histórica» en Santiago. En efecto, su alcance es enorme en el plano doctrinal. Tendrá grandes repercusiones tanto en el extranjero como en la política interior chilena.

Desde el punto de vista de la doctrina, el decreto presidencial invoca la declaración núm. 1083 de las Naciones Unidas, que proclama «el derecho inalienable de cualquier estado a disponer libremente de sus riquezas y de sus recursos naturales en las mejores condiciones para sus intereses nacionales», así como «el respeto a la independencia económica de los Estados». Es una forma de traducir a hechos lo que no pasa de ser un deseo respetuoso de la Organización Internacional.

Por otra parte, este decreto señala: *«Por falta de un control adecuado, las inversiones extranjeras no han permitido a los países ricos contribuir al desarrollo de los países pobres [...] Todo lo contrario, han conducido a estos últimos a contribuir*

al desarrollo de aquellos». Encontramos aquí el espíritu de las «representaciones» que el Ministro demócratacristiano de Asuntos Exteriores, Gabriel Valdés, realizaba hace dos años a Nixon en nombre de Chile y del conjunto de países miembros de la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Cambio). «América –decía– *da a los Estados Unidos más de lo que recibe*». Es precisamente la noción de «beneficios excesivos» la que amenaza con sentar jurisprudencia e incitar a otros países de América Latina y del Tercer Mundo a utilizar el mismo tipo de argumentos.

Los chilenos han calculado la diferencia entre la media de los beneficios declarados por las compañías cupríferas americanas en el total de sus operaciones internacionales y los que fueron obtenidos en Chile. Mientras que en otros países la media era del orden del 8 al 12%, en Chile los beneficios alcanzaban el 25% y en ocasiones el 40%. Por ello Chile ha considerado que por encima del 10%, los beneficios de las compañías eran ilegítimos. Los cálculos realizados comprenden el período incluido entre el 5 de mayo de 1955 y el 31 de diciembre de 1970; antes, las sociedades ni siquiera tenían la obligación de publicar el balance de su ejercicio anual.

Pero, también en el plano interior, la decisión de Allende de «no pagar más que la cuenta exacta» es particularmente importante, pues conduce a romper con lo que los sociólogos llaman «la mentalidad dependiente», es decir, la tendencia a recurrir al vecino rico del norte tan pronto como surge la más mínima dificultad económica.

Esto explica la unanimidad con respecto a esta política de «recuperación de las riquezas de base». Así justificaba un diputado del Partido Nacional (derecha) su voto, en el momento de la nacionalización, en julio, poniendo en evidencia tal acuerdo general: *«Nosotros estamos en contra, pero votamos a favor pues, de lo contrario, nos tacharían de antipatriotismo»*.

Evidentemente, Allende satisface a la izquierda e incluso a la extrema izquierda, siempre propensa a considerarlo más reformista que revolucionario. Arrastra a la oposición a un terreno que no es habitualmente el suyo: el de la lucha contra el extranjero. Se concede así una tregua frente a las amenazas de «sedición» de la extrema derecha.

El Interventor General de la República fijará, el 14 de octubre, el total de la indemnización, aunque las apuestas parecen prácticamente cerradas. Salvo para dos minas (Exótica y La Andina), de reciente explotación, y cuyos beneficios no parecen aún

«excesivos», el Estado no tendrá que pagar indemnización, sino que se convertirá en acreedor de las compañías extranjeras, situación que no dejaría de ser paradójica. Si las compañías estiman, como algunos aseguran, que se trata de un «robo», lo tendrán que demostrar ante el Tribunal Constitucional chileno *ad hoc*.

Le Monde, domingo 24/lunes 25 de octubre de 1971

Alborozo en Santiago en el «campamento» Pablo Neruda

El premio Nobel concedido a Pablo Neruda ha hecho renacer, de repente, la unanimidad de los chilenos. Un senador del Partido Nacional (conservador) ha declarado: «*Estamos tan contentos que felicitamos al Partido Comunista por contar entre sus filas con un poeta tan brillante*». En todo el país, los periódicos echan las campanas al vuelo. Pero la expresión «echar las campanas al vuelo» adquiere un sentido muy concreto en la «población» Pablo Neruda. Se trata de un campamento en donde unas dos mil familias sin hogar se han instalado hace dos años, tras haber ocupado unos solares en los alrededores de Santiago. Allí levantaron unas casuchas separadas por calles mal trazadas, y a cada una de ellas le pusieron el nombre de un poema del bardo nacional. Neruda en persona participó en la ocupación de los terrenos. Antes de volver a París, vino a despedirse de sus amigos.

Hoy es un día de fiesta. Se colocan guirnaldas, se ponen banderas, se conectan altavoces. Los «pobladores» bailan la «cueca» (baile nacional) y brindan con alegría para celebrar tanto la gloria del poeta como la perspectiva de instalarse en breve, «gracias al nuevo régimen», en casas «sólidas». «*Este año todo va bien* —dice un obrero risueño— *tenemos el Gobierno, Colo Colo (popular equipo de fútbol) está a la cabeza del campeonato, y a Neruda le han dado el premio Nobel*».

fr Monde, jueves 4 de noviembre de 1971

La extrema izquierda advierte al Gobierno de sus «debilidades» y sus «errores»

Criticando las «debilidades» y los «errores» (sobre todo en política agraria) del Gobierno de Unidad Popular, Miguel Enríquez, Secretario General del MIR (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria), ha dirigido una seria advertencia a Salvador Allende en el transcurso de un mitin celebrado el lunes 1 de noviembre en Temuco, a setecientos kilómetros al sur de Santiago, en la provincia agrícola más rica del país. Rodeado de su Estado Mayor, Enríquez tenía como auditorio fundamentalmente a campesinos mapuches, resueltos y entusiastas.

Desde el año pasado, los militantes del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), filial del MIR, habían hecho caso omiso al plan de expropiación llevado a cabo en el marco de la reforma agraria heredada de la administración demócrata-cristiana, apropiándose de *fundos* (propiedades agrícolas) que contaban con algo menos de ochenta hectáreas de regadío, mínimo exigido para la expropiación (*Le Monde* del 25 de mayo de 1971). Al principio, el Ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, asumió la situación en una política de hechos consumados. Pero, desde hace algunos meses, el Gobierno parece prestar oído a las protestas de los propietarios, que se quejan de la ilegalidad.

«Los patrones levantan la cabeza»

Hace diez días, un grupo de propietarios, apoyados por la policía, disparó contra los ocupantes «ilegítimos» de un *fundo* de ochocientas treinta hectáreas, casi abandonado, de la región de Loncoche, cerca de Temuco. Uno de los dirigentes del MCR, un mapuche, Moisés Huentelaf, fue asesinado de un balazo en la cabeza, otros dos campesinos heridos, varios detenidos.

El MIR, que ha dispuesto por primera vez de una difusión nacional inmediata gracias a la colaboración de una emisora de radio que cubre todo el país, ha aprovechado el homenaje en honor del líder indígena para denunciar los «aspectos negativos» de la política gubernamental. *«La represión»* —ha señalado Enrí-

quez— *ha empezado a ejercerse contra los campesinos y los obreros: las masas no están integradas en el proceso de transformación social: el aparato del Estado permanece intacto: los patrones levantan la cabeza y se pasean armados por los campos: se sigue respetando, como manda la burocracia, el mínimo de las ochenta hectáreas para expropiar los «fundos».*

Ahora bien, *«la legalidad de los patrones es el peor enemigo de los trabajadores» y «la única gran tarea en este momento es la conquista política del poder».* Así pues, hay que *«acabar con el Parlamento, dirigido por una mayoría que no es ya el reflejo del país, y sustituirlo por una «Asamblea del Pueblo» en la que estén representados realmente obreros, campesinos y soldados».*

El Secretario General del MIR ha afirmado que este discurso no suponía la «ruptura definitiva» con la Unidad Popular, con la que se complacerían, según él, *El Mercurio* (periódico conservador de Santiago) y las fuerzas de la derecha. Ha reconocido de buen grado los aspectos positivos de una política que ha conducido a la nacionalización del cobre y de la banca, al control de numerosas industrias, a la redistribución de los ingresos nacionales, a la reducción del paro y a la expropiación en un año de mil trescientos *«fundos».*

Es probable que el Gobierno replique y que Allende modifique en consecuencia el discurso que debe pronunciar el 4 de noviembre, en el transcurso de las grandes manifestaciones previstas para celebrar el primer aniversario de la llegada al poder de la Unidad Popular.

¿Una revolución sin costo social?

Ya se puede prever que el discurso de Temuco será condenado por el Partido Comunista chileno, a juzgar por su reacción ante los posicionamientos del Frente de los Trabajadores Revolucionarios (FTR), vinculado al MIR. Durante el primer congreso provincial del FTR, a finales de la semana pasada, Clotario Blest, gran figura del sindicalismo, antiguo Secretario de la Central Única de los Trabajadores, declaró que *«después de un año de gobierno de Unidad Popular, no había ni revolución ni socialismo».*

Alzándose contra la campaña de radicalización del FTR, que *«aspira a ocupar las fábricas sin discriminación».* *El Siglo*, órgano del Partido Comunista, escribe: *«El FTR tiende a crear una*

división en el seno del movimiento obrero, iniciando una maniobra que tiene como fin destruir el prestigio del Gobierno. La ultraizquierda mantiene posturas propias de la derecha: ya ha comenzado el «bombardeo» contra el Gobierno popular».

■ *Aquí se pueden leer algunos fragmentos de un artículo del 28 de octubre de 1971 (firmado por Pierre Laffonques, anagrama bastante transparente de Pierre Kalfon), escrito para Le Nouvel Observateur. El lector impaciente podrá encontrar en ellos un balance del primer año del Gobierno Allende, así como el anuncio de las dificultades que se avecinaban.*

¿Hasta dónde podrá llegar Allende?

El 4 de noviembre, el Gobierno de Unidad Popular celebrará su primer año de existencia controvertida pero dichosa. Habrá una fiesta en la Alameda, la «gran avenida» de Santiago, en donde está prevista una enorme manifestación a la que están invitados a participar los trabajadores «con sus instrumentos de trabajo». Salvador Allende ha invitado al bardo nacional, Pablo Neruda, cuyo Nobel ha hecho estremecer el corazón de los nueve millones de chilenos, tanto de derechas como de izquierdas.

Hace un año se establecía el primer Gobierno «de tendencia socialista» de la historia de Chile. (En 1938, el Frente Popular dirigido por el radical Aguirre Cerda no representó más que a la clase media.) Esta vez, en la coalición de la Unidad Popular predominan dos importantes partidos obreros que invocan principios del marxismo-leninismo: el Partido Socialista y el Partido Comunista.

Desde el principio de su mandato, el «compañero Presidente» previno a sus amigos de un entusiasmo excesivo: «Tenemos el gobierno, no tenemos el poder». Doce meses después, aún mantiene el mismo discurso. La batalla esencial sigue siendo la de la conquista del poder, es decir, del aparato del Estado. Sin embargo, el balance de este primer año de gobierno está lejos de ser negativo. Allende, que se ha confirmado como Jefe del Estado, ha alcanzado una dimensión nueva al instalarse en el Palacio de la Moneda. Ha logrado mantener, a pesar de su carácter heterogéneo, la cohesión de la coalición de la Unidad Popular, y también ha conseguido

poner en marcha de manera rigurosa la modificación de la estructura económica de un país afligido hasta la fecha por las taras clásicas del subdesarrollo.

Los recursos de la legalidad

Muy rápidamente, desde los primeros meses, utilizando todos los recursos y todas las sutilezas de una legalidad que no había sido establecida con este fin, todo un sector importante de la economía ha empezado a ser controlado por el Estado. Ya sea a través de la compra de acciones, ya sea por expropiaciones, o bien –en el ámbito rural– gracias a la Corporación de la Reforma Agraria, han pasado a pertenecer a «la propiedad social» el hierro, el nitrato, el acero, el cemento, el carbón, la industria textil, mil cuatrocientas fincas agrícolas que totalizaban cerca de tres millones de hectáreas (más que durante los seis años de la administración demócratacristiana anterior). Dueño en la actualidad del 80% del crédito (quince grupos bancarios de veintiséis), el Estado puede imprimir de aquí en adelante una orientación social, mientras que antes una minoría privilegiada del 3% de los clientes disponía en exclusividad del 53% del crédito.

Además, el cobre, riqueza de base y «salario del país» ha sido recuperado de las compañías americanas gracias a una reforma ad hoc de la Constitución, aprobada por unanimidad por el Parlamento. Ello ha permitido no solo nacionalizar las grandes minas, sino también restar a la indemnización prevista el total de los beneficios considerados «excesivos», obtenidos durante los últimos quince años. Nunca se valorará lo suficiente el carácter perfectamente legal y lo irrefutable de la argumentación jurídica de los chilenos, quienes no en balde pasan por ser los más finos juristas del continente. No se trata de un «robo», como han afirmado ciertos accionistas norteamericanos, sino de una operación de recuperación de riquezas nacionales, en perfecta consonancia con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que –oponiendo legítimamente el principio del derecho adquirido por el explotado al del derecho adquirido por el explotador– reviste un alcance internacional tanto mayor cuanto una acción de este tipo puede servir de jurisprudencia e incitar a otros países del Tercer Mundo a aplicar el «modelo chileno».

Para sorpresa de todos y quizá también de sus autores, la

política económica del Gobierno ha sido hasta la fecha todo un éxito: la redistribución de los ingresos nacionales ha permitido un aumento de los salarios del orden del 45%, además de un control a la vez estricto y flexible de los precios, que hace que el consumo popular haya aumentado de tal forma que la producción ha pasado de la depresión a la expansión. Mal equipado, mal alojado, mal nutrido, el pueblo llano chileno, que constituye el grueso de la población, se ha abalanzado, tan pronto como ha conseguido los medios, sobre los artículos de menaje, los productos alimenticios, la ropa.

Estimulada por una demanda tal, la producción alimentaria, por ejemplo, ha llegado a sufrir algunos problemas de abastecimiento en estas últimas semanas, sobre todo en lo que se refiere a la carne –lo cual ha elevado protestas contra el «racionamiento», y ha tenido efectos psicológicos lo suficientemente negativos como para que el Gobierno se preocupe. De hecho, se ha reducido la inflación a la mitad y el paro –mal endémico de Chile– ha descendido, cosa nunca vista, de un 8,3% en diciembre de 1970 a un 7% en septiembre de 1971. Y ello gracias fundamentalmente a la construcción de 83.000 viviendas en un solo año (frente a 25.000 con la Administración anterior).

Un balance como este es ampliamente favorable y los partidarios del régimen aprovechan este argumento para demostrar que se puede perfectamente emprender la construcción del socialismo gracias a las urnas y no al fusil, utilizando simplemente los recursos de la legalidad burguesa.

Esto es ir demasiado rápido.

¿Permite el nuevo rumbo de una parte de la economía chilena definir desde este momento el carácter de la transformación que se va a imponer a la sociedad? Una vez más nos encontramos con el mismo problema. En última instancia, no es otra cosa que un problema político: el de «la conquista del poder» por la clase obrera. El MAPU (movimiento formado inicialmente por disidentes democratacristianos y progresivamente transformado en partido marxista) ha dado con la fórmula más justa: «transformar la victoria en poder y el poder en construcción socialista».

Porque, más allá del panorama reconfortante de los resultados, surgen determinadas contradicciones, aparecen zonas de conflicto.

Los Estados Unidos no han dicho su última palabra

La primera, y tal vez la más grave, se refiere al cobre. Los Estados Unidos, evidentemente, no han dicho su última palabra, pero no es muy probable que intervengan más allá de las meras represalias económicas y financieras, que obligarían a los chilenos a aceptar las ofertas de crédito que les hacen los países del Este o las que ya les han confirmado los países capitalistas europeos. Este año, a pesar de un aumento del 10% de la producción, el cobre se está vendiendo mal en el mercado de Londres y el precio de la libra no superará los 50 centavos (mientras que los demócratacristianos habían conseguido obtener hasta 84 centavos). Ahora bien, nadie ignora que una diferencia de un centavo significa millones de dólares sobre una producción de 600.000 toneladas.

Pero lo que resulta más incómodo para un Gobierno popular es, por un lado, que los mineros se sientan tan poco concernidos por «la batalla de la producción» a la que los incita el Gobierno y, por otro, que tengan la osadía de presentar a su nuevo patrón, el Estado, largas listas de reivindicaciones reclamando, entre otras cosas, un aumento salarial de un 50%. Después de haber reconvenido, en Santiago, donde los había convocado, a los dirigentes sindicales, Allende fue a Chuquicamata, la mayor mina del mundo a cielo abierto, a explicar a los propios mineros que esas cosas no debían hacerse con el nuevo régimen.

Llegamos aquí a un punto crucial, pues efectivamente nunca se ha visto que, a lo largo de su lucha por el poder político, los trabajadores hayan logrado aumentar la producción. En las condiciones determinadas de Chile es un desafío difícil de conseguir.

El Gobierno adolece de un elemento fundamental como es una «verdadera movilización de las masas». Quienes «piensan» la economía del país no pueden lanzarse imprudentemente a operar transformaciones estructurales de una cierta amplitud, que perjudican y lesionan tantos intereses, sin asegurarse de su retaguardia. Ahora bien, el enfrentamiento que desde la derecha y desde la izquierda se espera y se teme, acabará por producirse un día. El combate se libra por ahora en el Parlamento, dominado por la oposición, en la «Contraloría» (organismo encargado de velar por el respeto de la letra y del espíritu de la ley) y en el Tribunal Superior, que acaba de levantar alegremente la inmunidad parlamentaria a un diputado socialista,

Joël Marambio, por exceso de «activismo», pero se ha guardado de hacer lo propio con un diputado de extrema derecha implicado en el complot de octubre de 1970 que trataba de impedir que Allende accediese a la Presidencia.

El Ejército, ese gran desconocido

El equilibrio de fuerzas dista hoy de resultar favorable a la izquierda, y el Ejército –ese gran desconocido, recorrido por corrientes diversas, pero hasta el momento encerrado en una estricta «profesionalidad técnica»– no es precisamente un Ejército popular.

Hasta aquí, Allende ha sido capaz de guardarse tanto de la extrema derecha –que últimamente está levantando la cabeza– como de su extrema izquierda. Así, el Presidente ha preferido permitir la realización en aguas chilenas de la operación «Unitas» de la Marina de los Estados Unidos, a las que se opuso en todo instante siendo senador, antes que reavivar el mal humor norteamericano después del episodio, nada despreciable por otra parte, de la nacionalización del cobre. De la misma manera, si el activismo de la «izquierda revolucionaria» es frenado e incluso reprimido, según explican en la Moneda, es solo con el fin de «conservar suficiente autoridad para cuando haya que castigar a la extrema derecha».

El Gobierno prohíbe y condena las «ocupaciones ilegales» de las propiedades agrícolas, y entabla un proceso contra el órgano rojo y negro del MIR (Izquierda Revolucionaria) «El Rebelde» por haber reclamado el derecho de voto para soldados y suboficiales. Permite que la policía golpee a los «pobladores» miristas que acuden a la ciudad a protestar contra la lentitud de una administración que los mantiene en sus campamentos de los lejanos suburbios.

El proceso de transformación del país tiende evidentemente a radicalizarse cada vez más. La oposición se reagrupa. La Democracia Cristiana se plantea renovar su alianza con el Partido Nacional, símbolo tradicional de la derecha, para dos elecciones parciales que se celebrarán el próximo mes de enero. El Gobierno, obligado a definir cada día más claramente sus posiciones, precipita el ritmo de sus intererencias antes de que se discuta el proyecto de ley sobre el «sector de propiedad social».

Lo que hasta aquí le ha valido a Allende su notoriedad y su prestigio internacional, es que hasta ahora ha practicado el jue-

go legalista y parlamentario, sin que se pueda hablar en momento alguno de totalitarismo. esta es la originalidad del «modelo chileno» hacia el socialismo que hace soñar a las izquierdas moderadas europeas.

Pero el momento de la verdad se acerca. La cuestión que va de boca en boca en Santiago se refiere al Gobierno: ¿hasta cuándo, hasta dónde podrá llegar? ■

Pierre Lafonques

Le Monde, viernes 12 de noviembre de

Santiago tributó una acogida entusiasta a Fidel Castro

Fidel Castro, que ha comenzado el miércoles 10 de noviembre una visita oficial de diez días a Chile, ha confirmado haber recibido una invitación para ir a la URSS, país que no visita desde 1964, a Hungría, a Bulgaria y a Argelia. El General Mercado Jarrín, Ministro peruano de Asuntos Exteriores, ha confirmado el miércoles la intención de su Gobierno de establecer relaciones diplomáticas con Cuba. Fidel Castro, que acudió en 1959 a Venezuela y a la conferencia de la OEA en Buenos Aires, ha declarado al llegar a Santiago que «la historia de América Latina ha entrado en una fase cuyo objetivo final es la independencia definitiva de los pueblos del continente».

Poco tiempo después de aterrizar en Santiago, donde Salvador Allende y todo su gabinete lo han recibido con los honores militares, Fidel Castro ya ha batido un récord que hasta ahora solo poseían el General de Gaulle y la Reina de Inglaterra: el del entusiasmo popular.

El Partido Nacional (conservador) protestó contra esta visita; el grupo de extrema derecha (Patria y Libertad) llegó a publicar unos carteles poco amables con el líder cubano quien, hace tan solo un año y con motivo de la campaña presidencial en Chile, era presentado por las fuerzas de la derecha como «el

abominable barbudo», un ejemplo que no se debía seguir. Sin embargo, los periódicos de derechas le dan educadamente la bienvenida, mientras expresan el deseo de que las actividades de Castro no salgan del marco protocolario. Es el pueblo de los suburbios populares el que ha tributado una acogida inolvidable a Fidel Castro. Ante el paso del cortejo, bajo un sol estival, un bosque de banderas rojas (y también rojas y negras del MIR) venían a recordar que esta «singular visita» simbolizaba «la solidaridad de los pueblos latinoamericanos» en el combate contra «el imperialismo y el final del bloqueo continental» impuesto por los Estados Unidos a la isla rebelde. «*Cuba no está sola*». «*¡Adelante, Comandante!*», se leía en las pancartas profusamente desplegadas.

La muchedumbre desbordó en tantas ocasiones el cordón de seguridad para saludar al «Comandante», vestido con su tradicional «battle-dress», que fueron necesarias dos horas para que el coche descubierto que llevaba a los dos Jefes de Estado pudiera recorrer los veinte kilómetros que separan el aeropuerto de la Embajada de Cuba.

El final del bloqueo diplomático

Para Fidel Castro, esta visita (primera que realiza al extranjero desde 1964), anunciada tiempo atrás y diferida tantas veces, demuestra en la práctica que el bloqueo diplomático está de hecho concluido.

La escala en Lima, prevista en principio para su viaje de regreso a La Habana, deja suponer que Perú podría a su vez reanudar las relaciones diplomáticas con Cuba, como lo hizo Chile hace ahora un año.

El dirigente cubano permanecerá en Chile unos diez días. Tras recorrer el norte del país, donde está previsto que se entreviste con los obreros del nitrato, acudirá a Concepción, ciudad industrial y sede de una universidad de izquierdas, al sur de Santiago, y más adelante, en barco, se internará por los numerosos canales naturales que conducen al estrecho de Magallanes. De regreso a Santiago, participará en múltiples encuentros con los estudiantes y los obreros.

Para Allende, la presencia de Fidel Castro en Chile tiene un doble significado. Confirma claramente su política de apertura diplomática «en todas las direcciones» sirviendo de contrapeso a la visita, hace algunas semanas, del General Lanusse,

Jefe de la Junta Militar en el poder en Argentina, pero también aporta una cierta garantía revolucionaria a un régimen salido de las urnas y no del fusil, y todo ello precisamente en un momento en que se alzan algunas voces en la extrema izquierda chilena para declarar que la Unidad Popular se hunde en el reformismo.

«Los cubanos han pagado la novatada, dicen los partidarios de la Unidad Popular, y así nos han hecho un enorme favor. Intentaremos no caer en sus mismos errores y sacar partido de su experiencia, aunque nuestro camino sea diferente, pues nosotros debemos tener en cuenta el multipartidismo de nuestra coalición.»

Esta posibilidad de llevar a cabo una política de izquierda sobre el entendimiento del Partido Comunista y el Socialista, de cristianos y clases medias es sin duda lo que interesará particularmente a Mitterrand, que llega el jueves acompañado de Gaston Defferre y de Claude Estier. Chile parece un laboratorio en el que se está realizando una experiencia de la que la izquierda europea tal vez algún día saque fruto.

Le Monde, domingo 14/lunes 15 de noviembre de 1971

Los chilenos han apodado a Mitterrand el «Allende francés»

Fidel Castro, que ha visitado el viernes 12 de noviembre Antofagasta, ha sido recibido con entusiasmo por la población de la capital del «gran norte» chileno. El dirigente cubano ha denunciado el «sectarismo», ha criticado duramente a los Estados Unidos, «sociedad de consumo en decadencia», y ha afirmado que «la revolución cubana ha sobrevivido gracias a la ayuda soviética». Una bomba de gran potencia ha destruido unas instalaciones de telecomunicaciones un poco antes de la llegada de Fidel Castro a Antofagasta. El Primer Ministro cubano ha tenido ocasión, desde el jueves pasado, de conocer en Santiago a Mitterrand, Defferre y Estier, que son los invitados de Salvador Allende hasta el martes próximo.

Evidentemente, la presencia en Chile de François Mitterrand ha sido eclipsada por la de Fidel Castro, quien había llegado veinticuatro horas antes y cuyo prestigio suscita entre los chilenos un entusiasmo casi tropical. Mitterrand es relativamente poco conocido por estas latitudes, pero un periódico de Santiago ya lo ha presentado como un «Allende francés».

El viaje de Fidel Castro –seguido de cuatrocientos periodistas extranjeros– hacia las minas de cobre del norte ha permitido a las autoridades, a veces desbordadas por el ilustre visitante cubano, respirar un poco y ocuparse algo más de sus huéspedes franceses. Mitterrand, que está acompañado por Gaston Defferre, Presidente del grupo parlamentario socialista en la Asamblea Nacional, y Claude Estier, miembro de la Secretaría del Partido, había sido invitado, no obstante, la misma noche de su llegada a la gran recepción ofrecida en el Palacio de la Moneda por el Jefe del Estado chileno en honor de Fidel Castro.

El programa de la delegación socialista francesa prevé una visita del puerto de Valparaíso y de la región agrícola de Temuco, a setecientos kilómetros al sur de Santiago, en donde algunos campesinos Mapuche intentan recuperar sus tierras. El lunes, Mitterrand será recibido en un almuerzo por el Embajador de Francia, René de Saint-Légier. Proseguirá sus contactos políticos y dará una conferencia de prensa el martes, antes de volver a París.

El viernes, el primer secretario del Partido Socialista ha podido entrevistarse con Allende, quien había organizado para él una comida en la que participaban no solamente los representantes de todas las fuerzas políticas de la coalición de la Unidad Popular, sino también los Ministros del Interior, de Economía, de Asuntos Exteriores y de Agricultura, así como representantes de las Fuerzas Armadas y el Embajador de Francia.

Es evidente que el hecho de haberse codeado con Fidel Castro, aunque accidentalmente, y de haber sido recibido con interés por los dirigentes chilenos, va a mejorar sin duda ante la izquierda francesa la «imagen de marca» de Mitterrand, que ha tomado la delantera a los dirigentes del Partido Comunista francés y del PSU. La experiencia chilena parece, hasta aquí, bastante reconfortante para seducir a quien declaraba hace dos meses, en Salzburgo, con motivo de la Reunión de la Internacional Socialista: «*Nosotros no deseamos una revolución sangrienta, sino una política de la razón.*» (*Le Monde* del 7 de septiembre de 1971)

Ante nuestras preguntas tras el encuentro con Allende, Mit-

terrand ha expuesto cuáles son las enseñanzas que el Partido Socialista francés puede sacar de la experiencia chilena.

El respeto de las libertades

«Chile –nos ha dicho– es una síntesis interesante y original. En Francia, país industrial avanzado en la zona de influencia occidental, es poco probable que se pueda desarrollar una acción violenta sin que sea reprimida por las fuerzas de la gran burguesía. Por el contrario, el movimiento popular puede plantearse la victoria por la vía legal: gracias al sufragio universal y a las presiones de los trabajadores en aquellos sectores que están en crisis. Se trata de demostrar a los franceses que esa vía es posible. De hecho, Chile nos lo está demostrando. El «modelo chileno» nos interesa no solamente por el parentesco político curioso que existe entre nuestros dos países, sino sobre todo porque, en mi opinión, el Gobierno chileno parece haber conseguido transformar de arriba abajo las estructuras económicas manteniendo las libertades individuales. Hay diferentes modelos de socialismo: el modelo soviético, que nosotros rechazamos; el modelo socialdemócrata sueco o austriaco, que no nos parece suficiente; el modelo de los países en vías de desarrollo, como Cuba, Argelia o Yugoslavia, que funcionaría mal en Francia. El modelo chileno, por su parte, es importante en la medida en que logra realizar la síntesis, pues el socialismo es, sin duda, la transformación de la sociedad pero evitando caer en la barbarie o en la arbitrariedad.»

Mitterrand ha subrayado la fuerte impresión que le ha producido Allende: *«Unos amigos chilenos democratacristianos nos han dicho que ellos contaban con las rivalidades en el seno de la Unidad Popular. Nada nos ha dejado presentir tales divisiones. Allende nos ha fascinado por el magisterio moral que parece ejercer sobre sus compañeros y por su determinación por preservar el activo democrático de su país. También ha atraído nuestra atención sobre las diferencias entre la revolución cubana y la que vive actualmente Chile.»*

Le pedimos su opinión sobre el calificativo de «Allende francés», y Mitterrand prefirió que respondiera Gaston Defferre: *«Estaría contentísimo –dijo este último– con que se pudiese emplear esta expresión. Esto significaría que habríamos ganado la mayoría y que Mitterrand sería el Jefe del Gobierno.»*

fe Monde, sábado 4 de diciembre de 1971

Después de la visita del Primer Ministro cubano La oposición chilena parece buscar un enfrentamiento con el Presidente Allende

Nuevos incidentes, sucedidos tras los del miércoles 1 de diciembre, se han producido el jueves en Santiago de Chile. La policía ha dispersado a golpe de bombas lacrimógenas una manifestación de mujeres —la segunda en dos días— en la que denunciaban el coste de la vida y la escasez de productos alimenticios. Como la víspera, la manifestación parece haber sido organizada por los partidos de oposición al Gobierno de Unidad Popular.

Asimismo se han producido enfrentamientos entre estudiantes de derechas, que protestaban contra el estado de excepción decretado el jueves por la mañana, y policías, en los alrededores del Palacio Presidencial. Otros manifestantes han incendiado neumáticos, han prendido fuego a objetos en medio de la calzada, e incluso han disparado al aire. El gabinete de Allende culpa de estos desórdenes a una voluntad concertada, por parte de los partidos de la oposición, de amenazar la existencia de este Gobierno. A lo largo de estas últimas semanas, con motivo de varios conflictos, han aumentado las diferencias entre la Unidad Popular y los demócrata-cristianos, apoyados por los conservadores. Sus discrepancias se han avivado a causa de la prolongada visita de Fidel Castro, que abandonará Chile el sábado por la mañana. El Primer Ministro cubano hará una escala en Perú y en Ecuador, antes de regresar a La Habana el domingo.

En un Santiago tormentoso, inquieto, y bajo control militar, ante una muchedumbre de sesenta mil personas reunidas en el Estadio Nacional, Fidel Castro se ha despedido, el jueves 2 de diciembre, del «pueblo chileno», tras una estancia de más de tres semanas.

Si la visita del dirigente cubano ha servido para poner de relieve las diferencias que se habían manifestado, la víspera de su

llegada, entre la Unidad Popular y la Izquierda Revolucionaria (MIR) (*Le Monde* del 4 de noviembre), también ha reavivado la hostilidad de la oposición al Gobierno de Allende.

El Partido Nacional (conservador) y el Partido Demócrata-cristiano (dominado cada vez más por la corriente «dura» de los partidarios del antiguo Presidente de la República, Eduardo Frei), que actúan la mayoría de las veces de manera concertada, han acentuado su ofensiva en el frente económico, político e institucional, atacando al Gobierno en sus puntos débiles: las dificultades relativas al abastecimiento, el conflicto desatado entre partidarios y adversarios del Gobierno en la Universidad de Chile, y la nacionalización de la «Papelera», cadena de fábricas que produce casi el cien por cien del papel periódico, y cuyo principal accionista es el antiguo Presidente (conservador) Jorge Alessandri.

Los periódicos de derechas han convertido a la «Papelera» en el símbolo de las garantías sobre la libertad de expresión. Para contrarrestar las jugosas ofertas de compra hechas a los accionistas por el Estado, la derecha ha creado una organización que incita a los ciudadanos a «no vender su libertad» y les propone a su vez la recompra de sus acciones.

El periódico *El Mercurio* de Santiago de Chile (conservador) ha encabezado este movimiento y, en nombre de la libertad, se ha negado a insertar la publicidad gubernamental dirigida a los accionistas. Hasta la fecha, esta política parece haber sido bastante eficaz. Si no se plantea otro medio legal, el Estado tendrá problemas para controlar el monopolio del papel. De todas formas, había adquirido el compromiso formal de, en el caso de adquirir el monopolio, asegurar a los periódicos el abastecimiento habitual de papel, cualesquiera que fuesen sus tendencias.

En cuanto a la Universidad de Chile, es desde hace varias semanas el escenario de una lucha cerrada entre el Rector, Boeninger (de tendencia demócratacristiana) y el Consejo Superior (en donde la Unidad Popular es mayoritaria), que están en conflicto a propósito de un proyecto de reestructuración de las diferentes Facultades. Para protestar contra las decisiones del Consejo y con el asentimiento tácito del Rector, los alumnos de la Facultad de Derecho, de extracción burguesa por tradición, han «ocupado» dicho Centro.

Numerosos elementos del grupo nacionalista *Patria y Libertad* vinieron a echarles una mano, de tal manera que actualmente la Facultad se ha convertido en el bastión de la extrema dere-

cha en Santiago. Por poner un ejemplo, desde el tejado de este edificio, situado en el corazón de la ciudad, fueron lanzados los proyectiles que alcanzaron el coche del Ministro del Interior hace algunos días.

Las mujeres de los barrios ricos

El Gobierno no puede intervenir en la Universidad como consecuencia de su estatuto de autonomía. Por esta razón, las algaradas alrededor del Rectorado son casi diarias y los periódicos de la oposición desarrollan ampliamente un conflicto que opone, según ellos, «la libertad a la tiranía».

El miércoles por la tarde, la situación, ya de por sí tensa, se agravó bruscamente a causa de una manifestación masiva de mujeres, llegadas por lo general de las zonas ricas del «Barrio alto», que golpeaban cacerolas vacías para protestar «contra la falta de abastecimiento y el sectarismo de la Unidad Popular en la Universidad».

La víspera, Fidel Castro había reunido a veinticinco mil mujeres en el transcurso de un mitin en Santiago. El miércoles, el número de mujeres que se manifestaban era al menos tan elevado como en el mitin, solo que iban rodeadas de una multitud de militantes de extrema derecha que emprendieron sin tardanza la batalla contra los elementos del MIR, a los que se unieron rápidamente jóvenes militantes comunistas, socialistas y MAPU (movimiento escindido de la Democracia Cristiana, aunque declarado oficialmente como marxista-leninista). El secretario del MAPU, Ambrosio, fue violentamente agredido. Las sedes del Comité Central de las Juventudes Comunistas y de una sección del Partido Radical fueron saqueadas. Se produjeron innumerables refriegas que tuvieron como resultado noventa y seis heridos, de los cuales siete se encuentran en estado grave. A lo largo de la noche, el domicilio del Ministro de Sanidad, en el elegante barrio de la Providencia, fue atacado e incendiado. Hubo incluso disparos en los alrededores de la residencia personal del Presidente Allende. En un comunicado especial difundido el jueves a las 3 de la mañana, el Ministro del Interior anunció el cierre de dos emisoras de radio de la oposición, acusadas de difundir falsas noticias, de hablar de muertos durante las algaradas, etc.

Le Monde, domingo 26/lunes 27 de diciembre de 1971

AMENAZADO POR LA DERECHA, CONTESTADO
POR LA IZQUIERDA

El Gobierno chileno de Unidad Popular ve cómo aumentan los conflictos

La reciente visita de Fidel Castro parece haber contribuido a reavivar las pasiones políticas en Chile. El Gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende aborda su segundo año en el poder debiendo afrontar la hostilidad más decidida de la derecha y de un Partido Demócratacristiano que se convierte de nuevo en el árbitro de la situación. Todo indica que Eduardo Frei, Presidente de la República de 1964 a 1970 y líder del ala derecha de la Democracia Cristiana, piensa ya en las elecciones de 1976.

Amenazado por la derecha, Allende es contestado por la izquierda. Los obreros del cobre de Chuquicamata no han tenido en cuenta los consejos de moderación que Fidel Castro les dio en noviembre, y mantienen sus reivindicaciones salariales. Los técnicos de todas las emisoras de radio de la capital están en huelga desde el 24 de diciembre por la misma razón. Además, el MIR (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria) sigue considerando que el proceso revolucionario no es lo suficientemente rápido.

Por primera vez desde la llegada de Salvador Allende a la Presidencia, el Partido Demócratacristiano ha llevado a la práctica su amenaza de acusación constitucional, en esta ocasión contra el Ministro del Interior, José Toha (socialista), culpable, según ellos, de infringir varias veces las garantías constitucionales. El PDC acusa al Ministro, en primer lugar, de tolerar la existencia de «grupos armados» diversos, empezando por el que se ocupa de la seguridad personal del Presidente. En segundo lugar, lo acusan de atentar contra el derecho de reunión, basándose en las dificultades que se pusieron a algunas manifestaciones de campesinos o de estudiantes partidarios del Rector Boeninger (en conflicto abierto con la izquierda uni-

tal vez el proceso revolucionario iniciado hace un año. Dicho proceso se ahogaba claramente estos últimos meses bajo el peso de la legalidad que las fuerzas de la oposición tienen bien controlada.

Víctima tal vez de un exceso de optimismo

Prisionero de las reglas del juego que ha aceptado creyendo poder dominarlas, el Gobierno es hoy tal vez víctima de su exceso de optimismo. Allende, que nunca llegó a imaginarse que no fuese a haber resistencia, nos afirmó personalmente, hace poco, su convencimiento de que el enfrentamiento violento podía evitarse y que le sería posible caminar «legalmente» hacia el socialismo.

Sin embargo, parece que el momento de ese enfrentamiento violento se acerca y que las fuerzas de la oposición han decidido lanzar una nueva ofensiva —la más seria, sin duda, desde el complot que acabó con el General Schneider, en octubre de 1970.

«La violencia reaccionaria se ha desencadenado—subraya la Unidad Popular— coincidiendo con las declaraciones de un alto funcionario del Gobierno de Nixon en las que señalaba que el Gobierno chileno «no sobreviviría más allá de unos pocos meses.»»

Le Monde, martes 7 de diciembre de 1971

Constituidas «brigadas antifascistas» en las fábricas

La marcha de Fidel Castro y la firmeza del Gobierno han hecho bajar la tensión en Santiago, pero la provincia sigue en estado de excepción y el toque de queda se mantiene por la noche. Mientras que en los barrios burgueses de la capital las caceroladas, todas las noches a eso de las diez, se han convertido en el signo pintoresco de los adversarios al régimen, en la periferia, las amas de casa del campamento «Che Guevara»

(viviendas provisionales) han replicado organizando una «sopa popular» simbólica, ofrecida a las «damas de la alta sociedad» *que tienen el frigorífico lleno, pero toman como pretexto las dificultades de abastecimiento para atacar al Gobierno*.

El viernes 3 de diciembre, el Partido Comunista se ha declarado «en pie de guerra». Reconociendo *«las dificultades pasajeras del movimiento popular»*, ha anunciado que iba a pasar a la ofensiva y no iba a permitir que las «bandas fascistas» saliesen a la calle.

Por su parte, el Frente de los Trabajadores de la Izquierda Revolucionaria (FTR) ha anunciado la creación de las «brigadas antifascistas» en las fábricas. El FTR, de reciente formación, se propone obtener una representación en el seno de la CUT (Central Única de los Trabajadores), dirigida hasta la fecha por el diputado comunista Luis Figueroa.

En cuanto al Gobierno, irritado, desde hace tiempo, por los ataques violentísimos y a menudo groseros del periódico de extrema derecha *Tribuna*, ha decidido denunciarlo por la publicación de un artículo considerado como insultante para las Fuerzas Armadas, en donde se podía leer que los militares chilenos se habían vendido a la Unidad Popular *«por un coche, una casa, un aumento de sueldo»* y que las fuerzas de la policía *«tenían miedo»*.

La crisis actual hace que la atención se dirija hacia las Fuerzas Armadas, que podrían ejercer de árbitro de la situación. El único «golpe» militar importante registrado en la historia de Chile se remonta a 1924. Hoy nadie puede decir de qué lado estaría el Ejército si, contrariamente a su tradición de neutralidad política, tuviera que elegir un bando.

El Ejército, que se nutre mayoritariamente de las clases medias, se encuentra en este momento atravesado por corrientes diversas. Las preferencias políticas varían según las generaciones, los grados, y el impacto sufrido durante los cursos de formación en los Estados Unidos. No obstante, nunca ha estado tan mimado, adulado ni protegido como con el Gobierno actual, cuya estrategia es la de incorporarlo cada vez más al «proceso de transformación» del país.

Le Monde, domingo 26/lunes 27 de diciembre de 1971

AMENAZADO POR LA DERECHA, CONTESTADO
POR LA IZQUIERDA

El Gobierno chileno de Unidad Popular ve cómo aumentan los conflictos

La reciente visita de Fidel Castro parece haber contribuido a reavivar las pasiones políticas en Chile. El Gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende aborda su segundo año en el poder debiendo afrontar la hostilidad más decidida de la derecha y de un Partido Demócratacristiano que se convierte de nuevo en el árbitro de la situación. Todo indica que Eduardo Frei, Presidente de la República de 1964 a 1970 y líder del ala derecha de la Democracia Cristiana, piensa ya en las elecciones de 1976.

Amenazado por la derecha, Allende es contestado por la izquierda. Los obreros del cobre de Chuquicamata no han tenido en cuenta los consejos de moderación que Fidel Castro les dio en noviembre, y mantienen sus reivindicaciones salariales. Los técnicos de todas las emisoras de radio de la capital están en huelga desde el 24 de diciembre por la misma razón. Además, el MIR (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria) sigue considerando que el proceso revolucionario no es lo suficientemente rápido.

Por primera vez desde la llegada de Salvador Allende a la Presidencia, el Partido Demócratacristiano ha llevado a la práctica su amenaza de acusación constitucional, en esta ocasión contra el Ministro del Interior, José Toha (socialista), culpable, según ellos, de infringir varias veces las garantías constitucionales. El PDC acusa al Ministro, en primer lugar, de tolerar la existencia de «grupos armados» diversos, empezando por el que se ocupa de la seguridad personal del Presidente. En segundo lugar, lo acusan de atentar contra el derecho de reunión, basándose en las dificultades que se pusieron a algunas manifestaciones de campesinos o de estudiantes partidarios del Rector Boeninger (en conflicto abierto con la izquierda uni-

versitaria). Finalmente le reprochan que haya puesto deliberadamente al servicio de Gobierno los medios de comunicación de masas, en particular las cadenas de televisión del Estado (*canal 7*) y de la Universidad de Chile (*canal 9*) y de haber concedido parcamente el derecho de réplica a los partidos de la oposición.

Tras su probable admisión por la Cámara de los Diputados, la acusación será examinada por una comisión formada por cinco diputados elegidos por sorteo, que aportarán un primer veredicto esta misma semana. A continuación será el Senado el que, funcionando como un Alto Tribunal, decidirá sobre la suspensión del Ministro. No obstante, la Constitución permite que el Presidente renueve su confianza en el Ministro, asignándole de nuevo la misma cartera. En la historia parlamentaria de Chile existen ya precedentes de este género. En todo caso, el Gobierno ha reaccionado con rapidez y ha propuesto, con carácter de urgencia, un proyecto de ley institucionalizando el «Departamento de Seguridad Presidencial».

También en el plano parlamentario, los demócratacristianos han conseguido, además, que se adopte una reforma de la Constitución que defina de manera estricta las nacionalizaciones. Cualquier embargo por parte del Estado de un determinado monopolio deberá ser previamente sometido al control de ambas Cámaras y será objeto de una ley. Es un golpe directo contra el «artículo 520» en el que se ha apoyado el Gobierno en diversas ocasiones para nacionalizar varias empresas con una posición «estratégica» —según se decía— en la economía nacional. Por lo demás, cualquier intervención del Estado posterior al 14 de octubre, fecha de presentación del proyecto de reforma, sería considerada nula.

El regreso de Frei

En este momento es el Congreso en su conjunto el que debe, de aquí a dos meses, ratificar dicha reforma, sabiendo que una de las paradojas del régimen actual es que el Gobierno no dispone de la mayoría en ambas Cámaras, más bien al contrario. Si el Presidente se niega a promulgar esta reforma, que es algo a lo que tiene derecho, y si el Congreso rechaza a su vez el veto presidencial, Allende no tendrá más que una única salida: el plebiscito. Hace ya tiempo que planea por todas partes la sombra del plebiscito y el propio Allende, durante un gran mitin con los

partidarios del régimen, el 20 de diciembre, declaró de nuevo: *«Si la oposición quiere el plebiscito, lo tendrá».*

En el momento en que Tomic vuelve de la China Popular y el ex Presidente Eduardo Frei, por su parte, regresa de un largo viaje a los Estados Unidos, la Democracia Cristiana aparece cada vez más como el árbitro de la situación y da la impresión de que sea el sector «duro» el que domine actualmente, por encima de aquellos que apoyan el diálogo con la Unidad Popular.

«¿Van ustedes a negar a Allende «el pan y la sal», después de reprochar a la izquierda que hubiese hecho lo mismo durante la presidencia de Frei?», preguntaron los corresponsales extranjeros a Renán Fuentealba, nuevo Presidente del PDC. *«Nosotros no hemos llegado aún a ese punto; nuestra acusación contra el Ministro Toba es únicamente una amonestación, una llamada de atención para que rectifique una política errónea, pero en el caso de un golpe militar, por ejemplo, desde luego que estaríamos al lado del Gobierno sin ningún tipo de reserva»*, respondió el dirigente demócratacristiano.

Hay que señalar, además, que la Democracia Cristiana se negó a votar, el jueves pasado, con los diputados del Partido Nacional, quienes acusaban en la Cámara a Pedro Vuskovic, Ministro de Economía, de «maniobras de distorsión del índice del coste de la vida».

En realidad, la Democracia Cristiana no ha tardado en darse cuenta de que el Gobierno había decepcionado o contrariado a una gran parte de las clases medias e incluso de las capas más populares de la sociedad. El sectarismo, «enfermedad infantil del socialismo», la burocracia, «herida siempre abierta», determinadas dificultades de abastecimiento alimentario, han contribuido a crear un descontento tanto más grave cuanto las masas populares, en definitiva el único apoyo verdadero de Allende, han estado hasta aquí mucho más a la defensiva que en posición ofensiva.

Ha sido necesaria la alerta del 1 de diciembre y la marcha tumultuosa de las «cacerolas vacías», calificada unánimemente hoy por toda la izquierda de «maniobra fascista», para que una cierta movilización popular se manifieste. Actualmente, en Chile, los recuentos de asistentes a cualquier tipo de manifestación son cada vez más explícitos y más frecuentes. El Estadio Nacional, lugar privilegiado de los grandes mítines, se ha convertido en una especie de barómetro de la temperatura política de cada bando. Allende consiguió abarrotarlo al día siguiente de su victoria de 1970. Y de nuevo un año después, en el pasado mes de

noviembre. A principios de diciembre, Fidel Castro, que se despedía del pueblo de Santiago, señaló de pasada que había algunas gradas vacías.

Elecciones parciales el 16 de enero

La semana pasada, los demócratacristianos, a su vez, convocaron no solo a sus tropas, sino también a los demás miembros de la oposición para demostrar su fuerza. El 8 de enero fue el Partido Comunista quien reunió a sus militantes. Nunca la vida política chilena, de por sí muy agitada, lo había estado tanto como en este momento. Un nuevo pulso se le plantea al Gobierno: la posible huelga de los ocho mil quinientos mineros de Chuquicamata, el mayor yacimiento de cobre a cielo abierto del mundo, en el norte del país, nacionalizado desde hace seis meses. Los obreros exigen el 50% de aumento en los sueldos. Las autoridades no ofrecen, hasta ahora, más que el 22%, pero es probable que vayan algo más lejos, con el fin de evitar la pérdida de un millón de dólares por día de huelga y el deterioro sensible de la imagen prestigiosa de un Gobierno «socializante» en conflicto con los obreros de la primera empresa industrial del país.

Si las negociaciones fracasan, la hora H se cumplirá a las 12 de la noche del 31 de diciembre. Pero, con todo, no será el regalo de Año Nuevo más amargo para la Unidad Popular. El 16 de enero, dos elecciones parciales para un senador y un diputado se celebrarán simultáneamente en dos provincias de la región central. A pesar de que las consecuencias sobre una posible modificación de la mayoría parlamentaria sean prácticamente nulas, la opinión pública coincide en que se trata de un mini-plebiscito. Ahora bien, esta vez la derecha sabe que puede contar con el apoyo demócratacristiano para su candidato a la diputación, y el candidato demócratacristiano al Senado, por su parte, ha solicitado abiertamente el apoyo de la derecha, y sabe que ya cuenta con él.

Es evidente que la polarización se acentúa en un país tradicionalmente politizado. ¿Podrá Allende, en estas condiciones, seguir manteniendo por mucho tiempo el reto de la «revolución en la legalidad»?